

## Con los pies sobre la tierra

“No nos vamos a ir”

*Armando Bartra Vergés\**

*Y de repente un día entra una topadora y se encuentra que por donde tiene que hacer una locación petrolera está mi casa. Y ahí comienzan los problemas, porque justamente nosotras no nos vamos a ir a vivir a la luna, o a otro lado que no sea donde siempre hemos estado. Entonces nuestra lucha es fuerte.*

Mujer mapuche<sup>1</sup>

La ancestral lucha por la tierra está de regreso convertida en defensa del territorio y el patrimonio de los pueblos, una resistencia que es multiforme pues responde a amenazas diversas: minería tóxica, grandes presas, carreteras, urbanizaciones, cárteles de la droga, entre otros. Sin embargo tras de la pluralidad de los movimientos subyacen agravios compartidos y tendencias coincidentes que sugieren la conformación de una nueva etapa del activismo rural definida por su condición nacional, ascendente, popular, política, ofensiva, convergente, campesindia, entre otros rasgos característicos.

*The ancient land battle is back, transformed into defense of territory and heritage of people, a resistance that is multi-formed as it responds to various threats: toxic mining, big dams, roads, housing developments, drug cartels, etc. However behind the plurality of movements, are hidden shared injuries and consistent trends suggesting the formation of a new phase of rural activism defined by its national condition, ascending, popular, political, offensive, convergent, rural-indian, among other traits.*

**SUMARIO:** I. Preámbulo / II. La defensa de los territorios / III. Recuento de resistencias / IV. ¿Una nueva etapa del movimiento rural mexicano? / Fuentes de consulta

---

\* Doctor en Filosofía, Profesor Investigador del Departamento de Relaciones Sociales, UAM-X. Coordinador del suplemento “La Jornada del Campo” en el periódico *La Jornada*.

<sup>1</sup> Citado en Carmen Cariño, “En defensa de los recursos naturales y el territorio”, *La Jornada del Campo*, núm. 44, *La Jornada*, 21 de mayo del 2011.

## I. Preámbulo

El primer combate que los belicosos yaqui tuvieron contra las fuerzas españolas fue el 5 de octubre de 1533. Los españoles, al mando de Diego de Guzmán, habían llegado el día 4 a la margen izquierda del río Yaqui: pasaron dicho río el día 5 y después de algunas horas de marcha, vieron en la llanura una multitud de indios que venía a su encuentro arrojando puños de tierra hacia arriba, templando los arcos y haciendo visajes. El jefe de ellos, cuando estuvo a corta distancia de los españoles, trazó con el arco una raya muy larga en el suelo, se arrodilló sobre ella, besó la tierra, después se puso en pie y empezó a hablar manifestando a los invasores que se volvieran y no pasaran la raya, pues si se atrevían a pasarla perecerían todos.<sup>2</sup>

Cuatrocientos setenta años después la raya sigue ahí. En mayo de 2013, la tribu yaqui instalaba un campamento sobre la carretera internacional 15 cerca de Vicam, exigiendo la cancelación del acueducto Independencia que conduciría rumbo a Hermosillo 75 millones de metros cúbicos de agua del río Yaqui, dejando sin riego a los pobladores originales en beneficio de los capitalinos, pero también de empresas como Ford, Heineken y Big Cola. Asunto en el que, al parecer, también intervienen, por debajo del agua corporaciones trasnacionales que rentan tierras en el Valle.

No importa si lo de la raya en el suelo y el “no pasarán” de 1533 es leyenda o verdad, el hecho es que los yaqui llevan cinco siglos repelando por su sierra, por su valle, por su río, por el derecho a gobernarse a su modo y por su existencia como pueblo. En el arranque del México independiente se dejaron usar militarmente por conservadores y por liberales, entre otras cosas porque mientras duraran los conflictos entre los grupos dominantes sus tierras no eran amenazadas, pero en los años ochenta del siglo XIX cuando el gobierno de Porfirio Díaz empezó a promover la colonización económica del valle, la tribu se puso en pie de guerra empleando armas y las tácticas aprendidas en el ejército. Y así siguieron hasta 1933 cuando el presidente Cárdenas les reconoció la propiedad de 36 mil hectáreas en forma de ejidos. Al firmar el acuerdo no dieron las gracias, simplemente dijeron que habían “ganado la guerra”.

No la habían ganado del todo y después han tenido que seguir peleando por su existencia. El combate más reciente, contra el acueducto Independencia, se inscribe en la nueva oleada de movimientos en defensa de tierras, aguas y otros recursos naturales. Generalización de la lucha por lo que hoy llamamos territorios, que es nacional pero también latinoamericana.

---

<sup>2</sup> Fortunato Hernández, *La guerra del Yaqui*, Hermosillo [México], Gobierno del Estado de Sonora, 1985, p. 133 y 134.

## II. La defensa de los territorios

En el tercer milenio, los campesindios mexicanos siguen luchando por la tierra como lo han venido haciendo los últimos quinientos años. Cuando la conquista resistieron la usurpación, durante el siglo XIX participaron en las guerras de Independencia y más tarde en estados como Yucatán, Sonora, y lo que ahora son Jalisco y Nayarit, se alzaron contra la exclusión y los emergentes latifundios. El movimiento encabezado por Manuel Lozada en el entonces Cantón de Jalisco, fue políticamente confuso pero claridoso en sus decires:

No estamos conformes, porque se nos ve como extranjeros en nuestra propia patria, razón de que nuestros terrenos están usurpados por los grandes propietarios, y aunque se nos ha ofrecido hacer que se nos devuelvan, jamás lo hemos conseguido.<sup>3</sup>

En el arranque del siglo XX se alzaron en armas por tierra y libertad. Consiguieron la primera pero no la segunda, pues los gobiernos posrevolucionarios cambiaron parcelas por sumisión política. Cincuenta años después sus hijos y nietos, que ya no habían alcanzado ejido, pelearon porque se reanudara el reparto agrario. Dos décadas más tarde, los indios se alzaron por el derecho a gobernar sus territorios.

Así, durante los siglos XIX y XX las mujeres y hombres del campo trajinaron de distintos modos por tierra y libertad. Y lo siguen haciendo. Sólo que hoy el combate rural más visible es defensivo y se libra en los llamados territorios: espacios en disputa donde las comunidades indígenas y mestizas tratan de preservar su patrimonio amenazado por codiciosas corporaciones. Es como si cinco centurias más tarde el saqueo iniciado en la Conquista y continuado en la Colonia se reavivara. Pero ahora la rapiña ya no es obra de encomenderos, hacendados y finqueros, sino de las grandes empresas y sus cómplices en el gobierno.

Las resistencias al despojo capitalista son globales, transclasistas y multiétnicas, aunque se intensifican entre los pobres de la periferia y, en particular, entre los indios con quienes el despojo se encona. En el continente americano se han multiplicado en los últimos tres lustros haciendo de la defensa territorializada de bienes comunes: naturales, socioeconómicos y culturales, una de las vertientes más concurridas del conflicto social del siglo XXI. Trajín contestatario que da fe de que en Nuestra América colonizada y clasista, el sujeto social rural más persistente es una bifronte fusión de lo campesino y lo indígena en que se entreveran el derecho a la tierra que se gana con el trabajo y el derecho a la tierra que otorga la ocupación ancestral.

De esta gran confrontación hay que dar cuenta documentándola pero también poniendo en claro lo que está en juego y lo que hay detrás: la racionalidad sistémica

---

<sup>3</sup> Citado en Jean Meyer, *Problemas campesinos y revueltas agrarias (1821-1910)*, México, SEP, SepSetentas, p. 104.

que subyace en la nueva ofensiva territorial del gran dinero y la trascendencia y significado de los movimientos que la resisten. Empezaré por la reseña.

### III. Recuento de resistencias

Minería tóxica con tajos a cielo abierto; exploración y explotación altamente contaminantes de combustibles fósiles; grandes presas, carreteras y ductos que desplazan pueblos, alteran cuencas y fracturan ecosistemas; erosión de la diversidad maicera a través del secuestro, alteración y privatización de su genoma; urbanizaciones salvajes y emprendimientos turísticos invasivos; ocupación de los espacios del pequeño comercio por las grandes tiendas departamentales; invasión del paisaje urbano por la publicidad comercial y política; desposesión del tiempo de ocio y sus lugares domésticos por los medios electrónicos de comunicación masiva que usufructúan el espectro electromagnético; privatización de las playas y el paisaje; mercantilización del patrimonio cultural material e inmaterial; saqueo forestal y pesquero; concentración de tierras agrícolas; acaparamiento y contaminación del agua dulce; carteles de la droga que imponen su ley sobre extensos territorios.

Todas ellas, actividades localizadas que chocan con formas preexistentes de apropiación del espacio y, en particular, de usufructo territorial. Así, de mil maneras, las comunidades rurales y urbanas vemos amenazado nuestro hábitat por una invasión de poderosas empresas predatoras. Corporaciones a las que casi siempre respalda el gobierno, no sólo porque la teología de la neoliberalización llama a privatizar, también porque los funcionarios van de los cargos públicos a los consejos de administración de los negocios que beneficiaron. Capitales intrusos que, a primera vista, no están tan interesados en explotar el trabajo de la gente, como en expropiar sus bienes patrimoniales y, a veces, expulsarla de la tierra interrumpiendo o desquiciando los intercambios sociales, laborales y simbólicos que nos unen con el lugar que habitamos. Y este es un acto de violencia, de violencia extrema.

No sólo los pueblos indios, todos los vivientes ocupamos uno o varios lugares en esta tierra y todos, sin excepción, participamos en relaciones territorializadas por las que habitando, trabajando y significando el entorno preservamos física y metafísicamente la vida, refundamos a diario el cosmos y una y otra vez le restituimos el sentido a las cosas. Si se rompe este vínculo mágico, si somos expulsados de nuestro lugar o se destruyen las condiciones que nos permitían permanecer, se rompe real y simbólicamente el equilibrio del mundo.

*Minería.* Todos reinventamos el cosmos de a poquito con los pequeños ritos privados y sociales de los que está empedrada la cotidianidad, pero los wixárika asumen la compartida responsabilidad cosmogónica de manera excepcionalmente entusiasta, generosa y colectiva, además de periódica, ritual y estetizada. Así, las peregrinaciones que 30 *mara'akate* o jicareros realizan todos los años al cerro sagrado de Wirikuta, donde a través de visiones propiciadas por el largo viaje, el ayuno y el

*hicuri* o peyote, recrean el mundo de la luz, son eventos que algún modo nos incumben a todos, por muy agnósticos que seamos.<sup>4</sup>

Pero la peregrinación anual de los chamanes huicholes está en riesgo y, por ende, también pelagra la armonía cósmica. Grandes partes del desierto del amanecer, que desde 1999 fue declarado reserva natural y lugar sagrado, han sido otorgadas a mineras como *First Majestic Silver*, que tiene 22 concesiones, y *Revolution Resources*, cuyo Proyecto Universo, está previsto para ocupar 60 mil hectáreas, la quinta parte de la reserva.<sup>5</sup>



lejornadajalisco.com.mx

Aunque divididos por un siglo de disputas territoriales, los wixárica se congregan año tras año para cumplir el compromiso que tienen con ellos mismos, con nosotros y con el Universo.

Aunque divididos por un siglo de disputas territoriales, los wixárica se congregan año tras año para cumplir el compromiso que tienen con ellos mismos, con nosotros y con el Universo. Y ahora lo hicieron también para defender sus territorios sagrados. El Frente Tamatsima Wahaa puso en acción a los indígenas, pero movilizó igualmente a un amplio segmento de la opinión pública formado por quienes sabemos —o intuimos— que permitir la destrucción de la base territorial de la cosmogonía Wixárica y con ella la destrucción de los huicholes como pueblo, es aceptar que se violente el orden cósmico: un delicado equilibrio sostenido sobre la pluralidad dialogante de las culturas. Primero se fueron sobre el desierto del amanecer y, si los dejamos, después se irán sobre los territorios significativos de todos los demás. Por fortuna de momento los paramos.

La amenaza minera que aun pende sobre Wirikuta es apenas un caso entre muchos. Desde los años noventa del siglo pasado los precios de los minerales se elevaron desmesuradamente —en diez años la cotización de la plata se multiplicó por ocho— desatando un prolongado boom extractivo tanto de metales industriales (hierro, cobre y aluminio) como de metales preciosos. Expansión que en América Latina resultó aun más arrasadora que en el resto del mundo.

<sup>4</sup> Johannes Neurath, “Wirikuta y la búsqueda colectiva de visiones”, *La Jornada del Campo*, núm. 55, *La Jornada*, 28 de marzo del 2012.

<sup>5</sup> Tracy L. Barrett, “Mensaje de los dioses: unirse para defender la cima del sol”, *La Jornada del Campo*, núm. 54, *La Jornada*, 17 de julio del 2012.

En este lapso México pasó del treinta al cuarto lugar en el *ranking* mundial de la minería y en lo que va del siglo XXI la extracción de oro se multiplicó por tres. Esto se explica por los buenos precios internacionales, pero fue propiciado por la Ley minera de 1993 y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor al año siguiente. La nueva normatividad le abrió paso a la inversión extranjera en un recurso que es de la nación y que no puede explotarse sin que medien concesiones. Y es que la Ley otorga prioridad a la extracción de metales sobre cualquier otra actividad económica y ha sido manejada con tanta laxitud que actualmente se han entregado permisos de exploración sobre 25% del territorio nacional, concesiones que son prácticamente a perpetuidad pues tienen una duración de 50 años y pueden prorrogarse por otros 50.<sup>6</sup>

Eckart Boege calculó que de estas concesiones, cerca de dos millones de hectáreas están sobre territorios indígenas, lo que representa 17% del total del área en posesión de comunidades originarias, afectando sobre todo a rarámuris, zapotecas, chatinos, mixtecos, coras y tepehuanes.<sup>7</sup> Lo que sin duda es alarmante pero, en la perspectiva de las resistencias, hay que tener presente que el resto de los permisos de exploración está sobre tierras que pertenecen a campesinos mestizos o que son ocupadas por comunidades en que estos coexisten con pobladores indígenas. De modo que los movimientos contra las expropiaciones son casi siempre pluriétnicos y con frecuencia multiclasistas. Baste mencionar que los lugares sagrados en que los wixárica realizan su peregrinación anual son territorios de campesinos mestizos y que sin su solidaridad activa, o cuando menos su neutralidad y anuencia, la lucha netamente identitaria de los huicholes se hubiera debilitado.

La expansión de la minería y en particular de la aurífera, ha sido favorecida por sistemas que permiten extraer el metal de formaciones con bajísima concentración. Para eso se hacen enormes tajos a cielo abierto en los que se remueven millones de metros cúbicos de tierra que, procesada en patios de lixiviación, arroja pequeñísimas cantidades de oro. La operación de una mina de este tipo, que emplea miles de toneladas de explosivos y millones de litros de agua, deja como saldo grandes cráteres lunares de enorme diámetro y cientos de metros de profundidad, así como depósitos de residuos tóxicos llamados “petateras” o “jales” que con frecuencia generan derrames o filtraciones de compuestos azufrados, arsénico y metales pesados. Esto ocurrió en 2012, en la reserva de la biósfera de la Sierra de Manatlán, donde se rompió la cortina contenedora de los residuos tóxicos de la mina Peña Colorada, ocasionando un desastre ecológico.

El asunto del agua empleada en la lixiviación es particularmente sensible, pues muchas minas están en zonas semiáridas o desérticas y para operar necesitan ingentes cantidades del vital líquido que dejan altamente contaminado. La minera Maza-

---

<sup>6</sup> Carlos Rodríguez Walenius, “Dominio del terreno campesino por mineras canadienses”, *La Jornada del Campo*, núm. 40, *La Jornada*, 15 de enero del 2011.

<sup>7</sup> Eckart Boege, “Minería: el despojo de los indígenas de sus territorios en el siglo XXI”, *La Jornada del Campo*, núm. 69, *La Jornada*, 15 de junio del 2013.



pil, de Zacatecas, por ejemplo, emplea 95 millones de litros diarios, la San Xavier, en San Luis Potosí, 32 millones diarios, y así.

Esta última, la San Xavier, dramatiza la perversa transición tecnológica hacia procedimientos cada vez más ecocidas, así como la creciente resistencia que esto genera. San Pedro era pueblo minero desde 1592, cuando a San Luis se le puso Potosí, en referencia al pasmoso Potosí boliviano. Y lo fue hasta 1994 en que la *American Smelting and Refining Company* dio por terminada la extracción, despidiendo a miles de trabajadores. Por décadas la población sobrevive muy mermada, hasta que en 1995 llega la minera canadiense *Metallica Resources*, ofreciendo reanudar la explotación y generar empleo. Al principio la perspectiva seduce a los habitantes, pero luego descubren que con los nuevos sistemas a cielo abierto va a desaparecer el emblemático cerro de San Pedro, que figura en el escudo de San Luis Potosí, y que por los explosivos resultarán dañados el pueblo y su templo del siglo XVII. Y la gente dice que no. En 1997 se organiza el Frente Amplio Opositor a la mina San Xavier, iniciándose una larga batalla política y legal, que finalmente gana el pueblo al conseguir un fallo judicial a favor de la suspensión. Por desgracia, para entonces el cerro de San Pedro ya había desaparecido.<sup>8</sup>

Las 64 pedreras, casi todas proveedoras de Cemex, que están acabando a grandes mordiscos con las montañas de los alrededores de Monterrey y amenazan la reserva ecológica Sierra de Picachos, son combatidas por el Comité Ecológico pro Bienestar y también por la Asociación Ecológica de la Sierra de Picachos, impulsada por el empresario Alfonso Barragán, dueño de gran parte de las tierras de la reserva, en lo que es un ejemplo no excepcional de cómo la defensa de la naturaleza puede coincidir a personas y grupos sociales habitualmente distantes y contrapuestos.<sup>9</sup>

Otra ciudad amenazada es la capital del estado de Guerrero, pero no por las pedreras sino por un gran relleno sanitario que dañaría la barranca de Chilpancingo y contaminaría las aguas que van a la presa Cerrito Rico. Al proyecto se oponen agricultores ejidales y habitantes de la ciudad.

En esto de la minería la gente está cambiando de idea. Desde la Colonia y después, numerosos grupos de indios y mestizos fueron metidos en socavones y sometidos a una explotación feroz. A eso no se acostumbra uno pero, de grado o por fuerza, con el tiempo muchos se volvieron mineros y hasta adecuaron su imaginario colectivo a la nueva condición.

Los pueblos originarios saben que abajo está el inframundo, el lugar de los muertos, *Mictlán*, para los aztecas, *Xibalbá*, para los mayas. Sin embargo, después de la Conquista, los nuevos amos se dijeron dueños del subsuelo impulsando, donde los había, la extracción de metales preciosos. Y en el pensamiento de las comunidades autóctonas vueltas mineras los viejos dioses de abajo dejaron su lugar a nuevas deidades.

<sup>8</sup> Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (FAO)/Rema, “Cerro de San Pedro: breve reseña de sus luchas”, *La Jornada del Campo*, núm. 67, *La Jornada*, 20 de abril del 2013, p 16.

<sup>9</sup> Sanjuana Martínez, “Pedreras tienen a Monterrey ‘en la cima’ de la contaminación”, *La Jornada*, 11 de agosto del 2013.

A Capulalpan, Oaxaca, la explotación del oro y la plata llegó en el siglo XVIII, y pronto los indios que trabajaban en el socavón descubrieron que el nuevo dios del inframundo era El Catrín,<sup>10</sup> quién a cambio de bonanza exigía sacrificios humanos en forma de accidentes fatales. Sin embargo, escribe Salvador Aquino que recogió la historia,

[...] mientras que en el imaginario de los obreros el subsuelo pertenecía a El Catrín, el territorio, el lugar donde llevaban a cabo su vida cotidiana, pertenecía a otra dimensión. A lo largo del territorio de Capulalpan existen sitios sagrados, lugares de peticiones de lluvia, sitios donde generaciones de comuneros han trabajado dando tequios, lugares de cultivo, sitios antiguos de la memoria de la fundación de la comunidad.<sup>11</sup>

En los últimos años, exploraciones de *Asarco*, *Continuum Resources Sundance* y otras mineras, concluyeron que empleando procedimientos novedosos, en Capulalpan aun hay oro y plata que extraer. Pero los comuneros ya lo pensaron mejor y en noviembre de 2012 decidieron en asamblea que no aceptaban la explotación de minerales en su territorio. Después de 200 años de dominio, los tiempos de El Catrín, terminaron, pues Salvador Aquino escuchó decir a los vecinos que en el subsuelo ya no reina más el dios de los mineros, sino San Mateo, patrón de los capulalquenses. Rectificación con la que quizá no se restaura del todo, pero sí se remienda el desgarrado imaginario que dejaron en los indios las formas de sometimiento colonial excepcionalmente bárbaras, como la minería.

En México, la mayor parte de las tierras productivas pertenece formalmente a comunidades agrarias. Y esto vale para la superficie donde —como acabamos de ver en el caso de Capulalpan— la gente aun ejerce un dominio laboral, habitacional y simbólico. Pero no vale para el subsuelo, que es propiedad de la nación representada por el Estado. De modo que el destino de lo que está abajo no lo deciden las comunidades sino el gobierno en turno, que es el que valora las solicitudes y otorga los permisos, tanto de exploración como de explotación. Sin embargo, para operar una mina hay que ocupar también la superficie y las explotaciones a cielo abierto llegan a emplear miles de hectáreas, de modo que las mineras tienen igualmente que negociar con los dueños de la tierra.

A veces lo que se regatea es un pago por el uso del suelo y una compensación por las afectaciones. Tal es el caso de la empresa canadiense *Goldcorp*, que desde 2009 tiene en Zacatecas la mina de oro a cielo abierto más grande de América Latina con dos tajos abiertos, el mayor de los cuales es un cráter con un perímetro de 3.5 kilómetros y una profundidad de 450 metros que pronto se incrementará hasta 600. Para abrir Peñasquito la empresa ocupó mas de 5 000 hectáreas propiedad de los

---

<sup>10</sup> Sobre El Catrín v. Alicia M. Barabas (coord.) *Diálogos con el territorio. Simbolizaciones sobre el espacio en las culturas indígenas de México*, México, INAH, 2003, p. 19.

<sup>11</sup> Salvador Aquino, “La leyenda de El Catrín. No a la extracción de oro y plata, sí a la vida”, *La Jornada del Campo*, núm. 67, *La Jornada*, 20 de abril del 2013.



ejidatarios de El Vergel, Cedros, Mazapil y Cerro Gordo, y para procesar las 550 mil toneladas de tierra que diariamente remueve, emplea millones de litros de agua extraídos de pozos que afectan la capacidad de riego de los agricultores. Fue necesario que el 17 de junio de 2013 los afectados, representados por el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, tomaran la mina, para que *Goldcorp* aceptara pagar 50 millones de pesos al ejido El Vergel por las mil hectáreas que le ocupó durante cuatro años y se comprometiera a que, a partir de 2014, pagara un millón de dólares al año por el derecho a ocupar las tierras y aguas necesarias para su mina.<sup>12</sup>

Sin embargo este es un caso extraordinario, por lo general las mineras entregan cantidades ínfimas a los dueños de la tierra. Así, la mencionada *Goldcorp* transfería 2.6% de su ingreso a las comunidades guerrerenses afectadas por la mina Filo Bermejil, y antes de la movilización de 2013 entregaba a los ejidatarios zacatecanos del entorno de Peñasquito apenas 0.065% de lo que la gigantesca mina le dejaba.<sup>13</sup> En cuanto a los derechos que las mineras pagan al Estado por los permisos de exploración, son igualmente simbólicos: \$500 por hectárea cuando la concesión es de entre 100 y 500 hectáreas, \$1 500, cuando es mayor, y nada cuando es menor.

Hay ocasiones en que los afectados no negocian pagos o compensaciones sino que de plano reniegan de las minas, como los wixárica, y entonces se generan choques fuertes y a veces cruentos. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, integrada por campesinos indígenas y mestizos de siete municipios de la región Costa-Montaña, de Guerrero, se enfrenta a la minera británica *Hochschild*; mientras que las comunidades de Mezcala, Carrizalillo y Xochiapa, también de Guerrero, se confrontan con *Goldcorp*, La gente de Zimapán, Hidalgo, lucha contra la *Carrizal Mining*, La Coordinadora de Pueblos Unidos de Ocotlán, Oaxaca, batalla contra la *Fortuna Silver*. En Chicomuselo, Chiapas, la bronca es con la *Blackfire*. En el ejido La Griega, de Chicomuselo, y en el mismo municipio, pero en el ejido Monte Sinaí, el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz García”, se enfrenta a la minera Montecristo 114. En Morelos el Movimiento de Pueblos y Ciudadanía Unida, repudia a la *Esperanza Silver*. Ejidatarios de La Sierrita, en Durango, van contra la minera *Exellon Resources*. En Veracruz hay un movimiento contra la minera Caballo Blanco.

No todo es resistencia. Siempre hay algunos que ven en la llegada de las grandes empresas la posibilidad de recibir un pago por su tierra o de conseguir empleo. No sólo por los cantos de sirena y las presiones a los que estas empresas recurren, también por lo luidos que están los tejidos comunitarios del mundo rural. Vivir de la agricultura es hoy un milagro, de modo que ya son pocos los que creen que las viejas estrategias campesinas les servirán para salir adelante y hay veces en que los proyectos externos en vez de reforzar las solidaridades comunitarias, fracturan a los pueblos.

<sup>12</sup> Alfredo Valadez, “Goldcorp indemnizará con \$50 millones a ejidatarios zacatecanos”, *La Jornada*, 31 de julio del 2013.

<sup>13</sup> Carlos Rodríguez Walenius, “Ganancias extraordinarias de la minería en México”, *La Jornada del Campo*, núm. 67, *La Jornada*, 20 de abril del 2013.

En muchos casos las mineras negocian con las comunidades dueñas de la tierra un pago por el uso de la superficie, pero esto puede crear problemas aun mayores. En Aquila, Michoacán, las empresas que desde hace 30 años extraen hierro de Las Encinas, primero Hylsa y ahora *Ternium*, entregaban 600 pesos anuales a cada uno de los 467 comuneros a los que pertenecen los terrenos. La compensación era ridícula y en 2012, después de una protesta, lograron que se pagara un adeudo que la empresa tenía y que la bonificación se incrementara. Pero la noticia se difundió y el cartel de los Caballeros Templarios, empezó a sobornarlos. Adicionalmente, el dinero los dividió y ahora los tiene enfrentados, pues unos acusan a otros de negociar con la minera al margen de la asamblea comunitaria. A mediados de 2013 un grupo de comuneros decidió armarse para resistir las exacciones, pero otros se sintieron amenazados y abandonaron la comunidad. En agosto de 2013 rondaban por Aquila decenas de hombres armados y encapuchados y había un centenar de personas desplazadas por amenazas de muerte. El 14 de agosto, policías y militares detuvieron y desarmaron a 45. Al día siguiente, los comuneros secuestraron a decenas de soldados como medida de presión para negociar la excarcelación de los detenidos.<sup>14</sup>

La minera canadiense *Esperanza Silver* quiere explotar a cielo abierto el oro y la plata que contiene el cerro El Jumil, que está a tiro de piedra del monumento arqueológico de Xochicalco y en una zona en parte boscosa y en parte agrícola que sería devastada. El Movimiento Morelense en contra de las Concesiones Mineras de Metales Preciosos se opone, sin embargo la comunidad de Tetlama está dividida y la mayoría es favorable al proyecto. Los argumentos de quienes dicen en sus pancartas “Sí a la mina”, son reveladores de lo mucho que se ha desgastado la esperanza en ciertas localidades: de lo triste y raído de las utopías que les quedan. Y es que una mina que arrasaría 700 hectáreas de campos agrícolas, desmontaría 170 hectáreas de selva y ensuciaría diariamente 760 mil metros cúbicos de agua, les parece aceptable porque “nos ofrecen un pozo de agua, y eso el gobierno nunca lo ha hecho”, su argumento mayor es: “¿Qué prefieres 500 mineros o 500 delincuentes?”, y su respuesta a quienes alertan contra las sustancias tóxicas empleadas en la lixiviación es “el cianuro no mata”.<sup>15</sup>

La exploración en busca de hidrocarburos y su extracción por Petróleos Mexicanos, son muy agresivas para el medio natural y las comunidades, y han sido confrontadas una y otra vez por quienes buscan impedirlos o cuando menos que se les compense debidamente por los daños. A fines del siglo pasado los tabasqueños afectados por Pemex se alzaron contra la paraestatal y hoy otros se aprestan a resistir. Tal es el caso del Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (Cdhhs), que desde 2006 previene contra el Proyecto Aceite Terciario del Golfo, que se desarrollaría sobre 1800 kilómetros cuadrados del paleocanal de Chiconte-

---

<sup>14</sup> Ernesto Martínez Elorriaga, “Niegan éxodo por la violencia en Aquila”, *La Jornada*, 9 de agosto del 2013, p. 28; ———, “En Aquila nos armamos contra el crimen organizado”, *La Jornada*, 16 de agosto del 2013, p. 3.

<sup>15</sup> Angélica Enciso, “Minera canadiense en busca de oro y plata pone en riesgo la zona de Xochicalco”, *La Jornada*, 6 de agosto del 2013, pp. 2 y 3.

pec, afectando a 16 municipios de Puebla y Veracruz.<sup>16</sup>

La resistencia a la extracción agresiva de minerales enfrenta intereses extremadamente poderosos y, en última instancia, cuestiona un modelo de desarrollo y un modo de producir de manera que, como es frecuente en movimientos que ponen en riesgo negocios de miles de millones de dólares pero también los dogmas de fe de la modernidad, los asesinatos de luchadores se han multiplicado. En la larga

historia de resistencia a la minera Tierra Colorada, han caído 35 compañeros, y recientemente desaparecieron tres. En Chiapas asesinaron al líder Mariano Abarca, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, que luchaba contra la *Blackfire*, y en Oaxaca a Bernardo Vázquez Sánchez, que se metió con la *Fortuna Silver*.

La otra cara de la moneda es una solidaridad cada vez más extensa, como la que se expresa en la Red Mexicana de Afectados por la Minería y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, este último agrupa a medio centenar de organizaciones de México, pero también de Honduras, Costa Rica, República del Salvador, Panamá y Estados Unidos.

Las formaciones regionales cuyos territorios y recursos amenaza la minería son, por lo general, plurales y diversas en su composición socioeconómica. Pero los grandes proyectos afectan de diferentes maneras a todos sus integrantes, provocando sorprendentes reacomodos en los alineamientos sociales.

Habitualmente las empresas y el gobierno hacen ofertas de empleo y desarrollo buscando convencer a los más débiles de que el proyecto es benéfico, y a veces lo consiguen, dividiendo el frente interno del ejido, la comunidad o la región. En compensación a veces sucede que también los acomodados o aun los ricos se sienten amenazados y buscan sumarse a la resistencia, generando movimientos como los que el boliviano Luis Tapia, pensando en los que despliegan los pueblos originarios, ha llamado movimientos societales,<sup>17</sup> pues en ellos convergen sociedades regionales enteras. Colectividades que, en este caso, están conformadas por sectores habitualmente divergentes y hasta contrapuestos. Ya mencionamos el caso de la reserva de Sierra de Picachos, en Nuevo León, pero hay otros.

En Baja California Sur, la mina Paredones Amarillos de la *Vista Gould*, autorizada por el gobierno desde 1997, y que hoy amenaza el área protegida Sierra La Laguna, ha sido confrontada por pobladores de los municipios de La Paz y Los

***Habitualmente las empresas y el gobierno hacen ofertas de empleo y desarrollo buscando convencer a los más débiles de que el proyecto es benéfico, y a veces lo consiguen, dividiendo el frente interno del ejido, la comunidad o la región.***

<sup>16</sup> Mauricio González, "Ponerle límite a la extracción petrolera", La Jornada del Campo, núm. 44, *La Jornada*, 21 de mayo del 2011.

<sup>17</sup> Luis Tapia Mallea, "Lo político y lo democrático en los movimientos sociales", en Luis Tapia Mallea (coord.) *Democracia y teoría política en movimiento*, CIDES-UMSA, La Paz, 2009, p 117.

Cabos, que en 2009 integraron el Frente Medioambiente y Sociedad, del que forman parte ciudadanos de a pie pero también asociaciones de médicos, de abogados, de ingenieros y numerosos empresarios, sobre todo del sector turístico. Participan, igualmente, los combativos maestros de la sección democrática del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) hombro a hombro con los socios del Club de Leones.

En la sierra norte de Puebla las amenazas son recurrentes y también las grandes convergencias para resistirlas. Las más recientes iniciaron a fines de 2012, cuando el Consejo *Tiyat Tlalli*, convocó a un foro en Amatitlán donde se informó de la existencia de un gran plan regional que incluye 22 proyectos mineros servidos por seis obras hidroeléctricas diseñadas para proporcionarles agua y energía, además de la construcción de varias de las llamadas Ciudades Rurales, donde se concentraría la población presuntamente desplazada. Específicamente, empresas como JDC Minerales, de nacionalidad china, amenazan ya la integridad de Tlamanca, en el municipio de Zautla. Dos meses después del Foro, en diciembre de ese año, alrededor de 6 mil personas provenientes de 32 comunidades se concentran en Tlamanca y marchan a las instalaciones de la mina, a la que dan 24 horas para salir.<sup>18</sup>

Respuesta popular rápida y potente que no se explicaría si en la región no hubiera experiencias previas de resistencia a amenazas externas, como el movimiento local que impidió la instalación de una tienda departamental de *Walmart* en Cuetzalan y el que evitó que Televisa registrara y comercializara las fiestas tradicionales dedicadas a San Miguel Arcángel. La más importante hasta ahora ha sido la que protagonizó la Coordinadora Regional de Desarrollo con Identidad (Cordesi), organización que surge en 2008 para enfrentar un proyecto de “Turismo de naturaleza”, diseñado por la Universidad Anáhuac e impulsado desde 2007 por la CDI y la delegación poblana de la Sedesol. Según el documento que lo justifica, la intención es formular “una propuesta que venda la naturaleza, el paisaje de los hombres, las tradiciones de la historia”.<sup>19</sup>

El proyecto, que abarca 11 municipios serranos con población nahua, totonaca y mestiza, incluye el desarrollo de infraestructura turística y la edificación de una gran Ciudad Rural en el llano, cerca de Libres, pero sobre todo supone el cambio de uso del suelo y el cambio de propiedad sobre la tierra. En esta tesitura la CDI comenzó a inducir la compra para fines turísticos, de terrenos con manantiales y caídas de agua ubicados en el valioso ecosistema llamado Bosque de Niebla.

Y los serranos se alzaron. No sólo se pusieron en pie de lucha añejas y experimentadas organizaciones campesindias como la Cooperativa *Tosepan Titataniske*, también lo hicieron los comités municipales del agua, diversas empresas asociativas de servicios y numerosos empresarios turísticos que veían amenazado su negocio,

---

<sup>18</sup> Rosa Herminia Guadalupe Goveia y Rafael Revilla, “Proyectos de muerte en la Sierra Norte”, *La Jornada del Campo*, núm. 67, *La Jornada*, 20 de abril del 2013.

<sup>19</sup> Mayolo Hernández Buena Vida, “Territorialidad y turismo en la Sierra Norte de Puebla”, tesis de maestría en curso, Maestría en Desarrollo Rural, UAM-X.

entre ellos los hijos de algunos de los caciques regionales más connotados. Sorpresas que da la vida.

La Cordesi diseñó un proyecto alternativo, que llamaron Turismo con identidad, y que, siendo pluriétnico y multclasista, asumía la indianidad regional como eje aglutinador de los tan diversos. En Cuetzalan, epicentro del movimiento, el cabildo abierto del municipio aprobó en 2010 la realización de un Ordenamiento Ecológico Territorial, ejercicio participativo que, además de confeccionar un útil documento técnico, sirvió para ir conformando un nuevo y polifónico sujeto regional y para construir un espacio compartido que en verdad va más allá de las delimitaciones administrativas o agroecológicas.

**Represas.** En el recorrido por el despojo minero y por las luchas a las que da cobertura la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), llegamos al tema del agua y las hidroeléctricas; presas que sirven a los fines del negocio extractivo pero también a otros intereses. Los grandes embalses, que durante el pasado siglo se multiplicaron en todo el mundo, generan gases de efecto invernadero: 18% del total de dióxido de carbono lanzado a la atmósfera y 104 millones de toneladas de metano que es aún más nocivo. Pese a ello, los llamados Mecanismos de Desarrollo Limpio le dan respaldo internacional a la generación de energía hidroeléctrica, por ser menos contaminante que la que se genera quemando hidrocarburos. Y en México proliferan los proyectos para edificar grandes presas. Así como prolifera la lucha contra ellas, por parte de los pueblos que se ubican en la zona del embalse y serían inundados, y de quienes están en las cuencas que se verían dramáticamente alteradas al bloquearse el curso de las aguas.

Hay en el mundo cerca de mil millones de personas sin acceso al agua potable, pero con frecuencia la forma de hacérsela llegar es más dañina que la propia sed. A Guadalajara, capital de Jalisco, le hace falta más agua, y para procurársela se planeó levantar la presa Arcediano sobre el Río Santiago. Casi todos los pobladores de lo que sería el embalse fueron obligados a salir, menos doña Lupita Lara que, como el escribiente Bartleby, de Herman Melville, dijo que no, que ella no se iba. Y no se fue. Por fortuna la obra fue cancelada, cuando se descubrió que el Santiago era un río muy contaminado y sus aguas no eran potables. En la rectificación influyó la presión ejercida por el Frente Amplio en Defensa del Agua y contra la Privatización, constituido en Jalisco en 2012. También en ese estado, la oposición ciudadana obligó a suspender la construcción de la presa El Zapotillo que, entre otros, inundaría el pueblo de Temacapulín, fundado en el siglo VI por los tecuexes.

La oposición a las presas por los que fueron o iban a ser desplazados debido a los embalses tiene historia. En Oaxaca se recuerda la resistencia a la Presa Cerro de Oro y en La Montaña estado de Guerrero, la lucha contra la que se iba a hacer en San Juan Tetelcingo y que a principios de los años ochenta del siglo pasado movilizó en su contra a 22 comunidades integradas para el efecto en el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas. Gracias a tres multitudinarias marchas de La Montaña a la Ciudad de México, la formulación de un Plan Alternativo de desarrollo regional y la exitosa apelación al Banco Mundial que iba a financiar parte de la obra, esta amplia

convergencia indígena logró detener el proyecto. En 1991 la organización nahua impulsó la creación del Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, que tres años después sería uno de los primeros en apoyar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).<sup>20</sup>

Regresando al presente, los huicholes y coras de San Luis Potosí se resisten a los grandes embalses que los amenazan, pues la presa Las Cruces sobre el Río San Pedro-Mezquitán, que planea la Comisión Federal de Electricidad (CFE), afectaría tierras de cinco municipios entre ellas sitios sagrados de los huixárica.<sup>21</sup>

En Oaxaca otras etnias originarias, los mixtecos y los chatinos, se organizaron en el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde (Copudever), para detener las presas Ixtayutla y Paso de la Reina. Claridosas, como siempre, las mujeres del Consejo dicen:

La desviación del cauce natural del río afectaría toda forma de vida en la cuenca. La pérdida de tierras atentaría contra la vida, pues en ellas habitamos, de ellas comemos, ahí están nuestros antepasados y nuestros lugares sagrados.<sup>22</sup>

Otros pueblos que habitan, trabajan y tienen a sus muertos en lugares amenazados por presas, son los que afectarían los 112 proyectos que la CFE ha diseñado para Veracruz, entre ellos Zongolica, sobre el Río Apatlahuaya; Jalcomulco, sobre el Río Pescados-La Antigua; Tlapacoyán y Atzalan, sobre el Río Bobos-Nautla. En el mismo estado, la hidroeléctrica El Naranjal, sobre los ríos Blanco y Metlac, requeriría un canal de 22 kilómetros a cielo abierto y afectaría a pobladores de cinco municipios, que para impedirlo formaron el colectivo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre, que desde 2011 tiene frenada la obra.<sup>23</sup>

La presa Pilares, a construirse en el municipio de Álamos y sobre el río Mayo, afectaría tierras patrimoniales de los guarijíos y esta siendo resistida por una parte de esta comunidad étnica.

Decir La Parota es recordar una lucha larga, difícil y hasta ahora exitosa. En 2003 el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), expulsa del sitio a la CFE, que había emprendido la construcción de la hidroeléctrica sin consultar a los posibles afectados. La Comisión soborna y divide a las comunidades, y en 2005 asesinan a Tomás Cruz Zamora, que se oponía al proyecto; en 2006 matan a Eduardo Maya Manrique, por la misma razón; y en 2007 ejecutan a Benito

---

<sup>20</sup> Armando Bartra (coord.) *Crónicas del Sur. Utopías campesinas en Guerrero*, México, ERA, 2000, p. 52 y 53.

<sup>21</sup> Juan García. “El rechazo a la presa Las Cruces”, *La Jornada del Campo*, núm. 57, *La Jornada*, 23 de junio del 2012.

<sup>22</sup> Citado en Ana María García Arreola, “Lucha contra la presa Paso de la Reina y por la autonomía”, *La Jornada del Campo*, núm. 57, *La Jornada*, 23 de junio del 2012.

<sup>23</sup> Gabriela Sainz, “La hidroeléctrica El Naranjal”, *La Jornada del Campo*, núm. 57, *La Jornada*, 23 de junio del 2012.



Cruz Jacinto. Con todo el Consejo resiste y escala el conflicto buscando solidaridad nacional e internacional y apelando a organismos multilaterales como el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Diez años después, la obra está detenida.<sup>24</sup> Sin embargo hasta ahora los esfuerzos de quienes pararon la presa por generar en la cuenca preservada un desarrollo rural alternativo que le de sentido estratégico a la lucha, reteniendo a la gente en la región, no ha tenido el mismo éxito. Lo que nos habla de la gran capacidad de convocatoria que tienen las resistencias y de lo difícil que es hacerlas proactivas.

Con todo, el balance de la oposición a las grandes presas es positivo. Están paradas en Guerrero, La Parota y San Juan Tetelcingo; en Oaxaca, Paso de la Reina; en Nayarit, La Cruces; en Chiapas, Itzsantún y Chinin; en Veracruz, El Naranjal. Se sigue resistiendo en las chiapanecas Boca de Monte-Tenosique y Chicoasén II-Copainalá; en la Bicentenario y la Pilares, de Sonora, así como en El Zapotillo, de Jalisco. Y hay también presas terminadas, como Picachos, en Sinaloa, que fue inaugurada en 2009, pero donde algunas de las 800 familias que fueron desplazadas, siguen protestando.<sup>25</sup>

Resultado alentador que no hubiera sido posible sin convergencias como las del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos. La red, que hoy tiene grupos en 17 estados, se formó en 2003 y desde entonces organiza encuentros anuales; el de 2013, realizado en Jalapa, Veracruz, tuvo que lamentar airadamente el asesinato por lapidación, de Salomón Vázquez Ortiz, integrante de la organización local Defensa Verde: Naturaleza Verde y opositor al proyecto hidroeléctrico El Naranjal y Bandera Blanca, en la región de Zongolica. También ha mejorado la correlación de fuerzas a favor del movimiento la participación en espacios internacionales como los Foros Mundiales del Agua.

El agua potable se privatiza de muchas maneras y por diferentes actores. Uno de ellos la *Nestle Waters*, que desde 2010 tiene una concesión para explotar los manantiales del eje neovolcánico transversal y específicamente los que se originan en el Iztaccíhuatl. A la privatización del líquido por la trasnacional se ha opuesto el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire. Convergencia que también rechaza la construcción de un gasoducto y una termoeléctrica que afectarían poblaciones de Puebla, Tlaxcala y Morelos.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, conformado en el Estado de México por los habitantes de Atenco, es emblema de resistencia territorial. En 2006 el Subcomandante Marcos, del EZLN, lo bautizó “el Séptimo de caballería”, porque siempre cabalgaba en defensa de los pueblos acosados, no por los apaches, sino por las privatizaciones, y efectivamente, el FPDT ha colaborado decisivamente en hacer

<sup>24</sup> CECOP, “Oposición a la Presa La Parota. Nueve años de resistencia ejemplar”, La Jornada del Campo, núm. 57, *La Jornada*, 23 de junio del 2012.

<sup>25</sup> Scott S. Robinson, “Megaproyectos: presas, minas y demás”, La Jornada del Campo, núm. 57, *La Jornada*, 23 de junio del 2012.



En 2006, el FPDF sufrió una feroz agresión por la fuerza pública y la mayor parte de su directiva fue encarcelada.

de movimientos reactivos y localizados, una extensa red nacional de solidaridades. En 2003 el Frente había logrado que se derogara un decreto presidencial de 2001, por el que 5 400 hectáreas pertenecientes a 13 ejidos de los municipios de Texcoco y Atenco serían expropiadas para construir el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tras el sonado triunfo, la organización se mantuvo activa respaldando otras luchas e impulsando proyectos de desarrollo en el Valle de Texcoco, por lo que permaneció en la mira, tanto

del gobierno federal como del estatal, cuyas intenciones había frustrado. En 2006, el FPDF sufrió una feroz agresión por la fuerza pública y la mayor parte de su directiva fue encarcelada. Ya recuperaron su libertad, pero ahora la amenaza viene por parte de la Comisión Nacional del Agua, que amparándose en un proyecto de Zona de Mitigación y Rescate Ecológico, promueve la plena titulación de las parcelas ejidales que facilite su enajenación a favor de empresas como Alter Consultores, que trabaja para la española OHL Concesiones. Al parecer el gobierno piensa revivir el proyecto del aeropuerto.<sup>26</sup>

Y cuando no son aeropuertos, son carreteras. Como la autopista Silao-San Miguel Allende, en Guanajuato, cuya construcción fue anunciada en 2013 y que dañaría áreas patrimoniales de la etnia ñañú, la zona arqueológica de Cruz del Palmar y la ruta de 100 capillas de indios del siglo XVI, y a la que se opone el Frente pro Patrimonio. En el Estado de México comuneros de La Concepción Xochicuautla y San Francisco Xochicuautla, organizados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Madre Tierra, están en contra de la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan, que dañaría las áreas naturales protegidas Parque Otomí-Mazahua y Bosque de Agua.

Las invasivas constructoras de vivienda o de infraestructura turística, también generan oposición. Al proyecto inmobiliario Reserva Santafé, en La Marquesa, Estado de México, se opone la comunidad Atarasquillo, porque barrería con el sitio sagrado otomí Nacelagua. En Rebalsito de Apazulco, en la costa de Jalisco, la Pes-

<sup>26</sup> Mayra Terrones, "Atenco sigue en pie", *La Jornada del Campo*, núm. 44, *La Jornada*, 21 de mayo del 2011.

quera Ejidal Tenacatitla se resiste a ser desalojada de sus puntos de pesca y de venta, por un proyecto turístico.

Dicen que quieren construir un megadesarrollo tipo Cancún —denuncia una pobladora— Con campos de golf que van a ocupar las tierras del ejido. Ahí van. Pero a mi no me van a callar con poquito.<sup>27</sup>

Con la acuacultura, la industria contaminante, los puertos y otras amenazas, el gran turismo es un peligroso destructor de manglares, ecosistema del que el país tiene 770 mil hectáreas, de las, que sin embargo, se pierden anualmente 1 500. La Red Manglar México se ha propuesto defender este prodigioso hábitat de biodiversidad.

En Chiapas y Puebla se resiste a los desplazamientos que están ocasionando las llamadas Ciudades Rurales Sustentables, que además de diseñadas para liberar a los privatizadores territorios hoy poblados por campesinos, son urbanísticamente topes y recuerdan mucho las reducciones y congregaciones con que, primero las órdenes religiosas y luego el poder virreinal, buscaban agrupar a la población autóctona para así mejor controlarla.

En Morelos, el Frente Unidos en Defensa de Tepoztlán, compuesto por los mismos que hace años evitaron la construcción de un club de golf hídricamente insostenible, resiste la ampliación de una carretera.

Los huaves de San Dionisio del Mar, los zapotecos organizados en la Asamblea Popular de Pueblo de Juchitán, organizaciones regionales de larga trayectoria como Ucizoni y diversos pueblos del istmo de Tehuantepec, cuestionan el establecimiento de parques eólicos por empresas como Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Mareña Renovables, pues independientemente de que el aire como fuente de energía es menos contaminante que, por ejemplo, las termoeléctricas, el modo en que están implementando los parques las corporaciones internacionales y sus cómplices en el gobierno, atropella a los dueños de las tierras y violenta los derechos de las comunidades sobre sus territorios.

Pequeños y medianos agricultores de Chihuahua organizados en El Barzón y el Frente Campesino Democrático, reivindican el agua para riego que los poderosos agricultores menonitas acaparan mediante represas no autorizadas y pozos clandestinos, en una cruenta lucha que ya dejó dos muertos.

**Bosques.** Dejé al final una lucha de larga data y que sigue vigente: la defensa de los bosques. En el arranque de los años setenta del siglo pasado la resistencia de las comunidades a los talamontes se hace visible. En Oaxaca, la comunidad de Macuilianguis se venía inconformando desde 1966 con los usos de la empresa paraestatal Fábrica de Papel de Tuxtepec (Fapatux), pero para 1972 se suman a la protesta otros 13 pueblos, que paralizan la sierra Juárez impidiendo que se saque madera de unos bosques que formalmente son suyos pero que no manejan. Este primer movimiento

---

<sup>27</sup> Aura Helena Ramírez, “Resisten los hombres del mar”, La Jornada del Campo, núm. 44, *La Jornada*, 21 de mayo del 2011.

se debilita, pero un bloqueo posterior y más organizado obliga al gobierno a negociar. La reivindicación de los serranos es que las comunidades indígenas silvícolas dueñas de los bosques puedan aprovecharlos directamente mediante empresas asociativas, pero lo que está en el fondo es la defensa de la tierra y sus recursos, y en positivo el concepto de autonomía de base comunitaria, que intelectuales indígenas como Jaime Luna y Floriberto Hernández empezaban a rumiar.<sup>28</sup>

También en los años setenta de la pasada centuria, se inicia formalmente en la sierra de Guerrero la lucha contra el saqueo de los montes propiedad de las comunidades, en este caso mestizas, que históricamente había corrido cuenta de empresarios rapaces como Melchor Ortega, dueño de Maderas Papanoa, a los que en 1972 se añade una paraestatal, la Forestal Vicente Guerrero, que supuestamente debía enfriarle el agua a la guerrilla del Partido de los Pobres, por entonces beligerante en la zona, absorbiendo y racionalizando el aprovechamiento de los bosques de la entidad, que hasta ese momento realizaban particulares. La empresa descentralizada en realidad consecuenta a los talamontes, de modo que los ejidos se organizan, creando en 1980 la Coordinadora de Ejidos Forestales de la Costa Grande y en 1988 la Unión de Ejidos de Producción Forestal y Agropecuaria, General Vicente Guerrero, que como en otros sectores y otras regiones, busca que las comunidades dueñas del bosque puedan “apropiarse del proceso productivo” maderero. En 1995, el gobierno concede a la empresa estadounidense *Bois Cascade*, el derecho exclusivo de compra y explotación de la madera en la Costa Grande, y la trasnacional contrata con 25 comunidades una arrasadora extracción silvícola que para principios del siglo XI había ocasionado la pérdida de 90 mil hectáreas de bosque, 40% del total. La respuesta la dan unas cuantas comunidades serranas, a través de la Organización de Campesinos Ecologistas de Petatlán y Coyuca de Catalán, fundada en 1998. Combativa agrupación que después de inútiles reclamaciones decide —como antes lo habían hecho los oaxaqueños de la sierra— bloquear la salida de madera. El gobierno y los caciques responden con represión: son asesinados Aniceto Martínez, Elena Barajas y Salomé Ortiz; otros, como Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, son torturados por el ejército y encarcelados. Gracias a su lucha la *Bois Cascade* sale de la región, pero aun más importante es que la organización serrana ayuda a darle rostro campesino a un movimiento ecologista que, como tal, era protagonizado por organizaciones de la llamada “sociedad civil”.<sup>29</sup>

Hoy los músicos son otros pero la tonada es la misma. Desde hace tiempo los talamontes se ensañan con los bosques de Zempoala y Huitzilac, entre los estados de Morelos y de México, las comunidades los defienden y por eso en 2007 fue asesinado al activista Aldo Zamora. En abril de 2011, los comuneros purépechas de Cherán, Michoacán, emprendieron la defensa de sus bosques y de sus vidas contra organizaciones criminales que combinan el negocio del narcotráfico con el de la extracción de la madera.

<sup>28</sup> Armando Bartra y Rosario Cobo, *La puerta del viento*, México, UCIRI/Instituto Maya, 2007, pp. 45-47.

<sup>29</sup> Armando Bartra, “La lucha por el bosque”, Ojarasca, núm. 47, *La Jornada*, marzo 2001, p. 6.

Eran entre 150 y 200 camionetas —cuenta Jesús Silva Tomás, del Consejo de Bienes Comunales— Alcanzaban a sacar dos viajes diarios, pues está relativamente cerca la carretera, como dos mil árboles verdes cada día. Y pues veíamos cómo se devastaba nuestro monte, sobre todo el que le llamamos “El San Miguel”. Me tocó ver que esos, los talamontes, pasaban por el centro del pueblo aun cuando la calle era de sentido contrario. Pasaban y nadie decía nada. Al contrario, creo que hasta nos agachábamos para no tener problemas. Hasta que la gente se fue hartando. Y más cuando empezaron a derribar cerca del ojo de agua que nosotros conocemos como La Cofradía. Eso fue lo que hizo que nos levantáramos.<sup>30</sup>

Y “nadie decía nada” porque los talamontes eran parte de “los malos”, “los armados”, “los mañosos”, grupos criminales fuertemente pertrechados que además del tráfico de drogas se apropian de recursos mineros y forestales sobornando y aterrorizando a la población. De ellos nos ocuparemos más adelante. Por el momento, baste decir que, a la postre, los de Cherán no se dejaron. Hartos de esperar que la intervención de la fuerza pública resolviera les devolviera la seguridad, pusieron retenes armados a las puertas del pueblo y en las noches encendían fogatas donde los vigilantes velaban. Hoy, Cherán es Municipio Autónomo y referente de todos los que resisten desde los territorios.

**Territorios indígenas.** La decisión purépecha de autogobernarse nos lleva al movimiento por las autonomías indígenas. Un trajín que se traslapa con los de quienes desde los territorios buscan proteger su patrimonio. Defensores que no siempre son indígenas y no en todos los casos tienen proyectos autogestivos de carácter socioeconómico o político, pero que serían impensables sin el fuerte impulso que la potente emergencia de las reivindicaciones autonómicas de los pueblos originarios —catalutados desde 1994 por la aparición del EZLN— le dieron a las demandas asociadas, si no con la autogestión de los territorios, si cuando menos con su defensa.

Dice la leyenda, casi mito fundacional, que en México los pueblos indios se levantaron de entre los muertos chicos —condición fúnebre en que los tenía la malhadada acción indigenista— gracias al primer Congreso Indígena Fray Bartolomé de las Casas realizado en Chiapas en 1974. El hecho es que desde entonces comienza a cobrar visibilidad el activismo de organizaciones étnicas regionales en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Veracruz, entre otros estados. Fuerzas locales que convergen en encuentros regionales y nacionales, y más tarde en el Consejo Mexicano 500 años de Resistencia Indígena y Popular. Pero la eclosión definitiva de los pueblos originarios como actor nacional protagónico ocurre en 1994, cuando al calor de la efervescencia política creada por el EZLN, surgen la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (Anipa) y el Congreso Nacional Indígena (CNI).

Autogobiernos de facto los hay desde 1994 en las regiones chiapanecas zapatistas que reconocen el mando del EZLN, y también en las llamadas Regiones Autono-

<sup>30</sup> Entrevista realizada por Mayra Terrones para proyecto de tesis de posgrado en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.



micas Pluriétnicas (RAP), que dentro del mismo estado impulsan otras corrientes políticas. Sin embargo, la emergencia de lo territorial como sustento del reconocimiento de los derechos autonómicos de los pueblos indios, tendrá que esperar a los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, entre el EZLN y el gobierno federal que incluye, si bien de manera limitada, ciertas formas de autogobierno. Como es sabido, el entonces presidente Ernesto Zedillo desconoció los acuerdos y un lustro después, en 2001, el poder legislativo aprobó una caricatura de la llamada Ley Cocopa, que recogía lo pactado en San Andrés.

Desde entonces, el EZLN abandonó toda negociación con el Estado mexicano, y en congruencia la CNI decidió replegarse a los territorios e impulsar desde ahí, “desde abajo”, la construcción de las autonomías. Y brotaron por el país algunos municipios autónomos como Rancho Nuevo de la Democracia, en Guerrero. Pero el hecho es que cuando dejó de pelearse el reconocimiento constitucional de los derechos étnicos, también el movimiento indígena perdió visibilidad y presencia nacional. Protagonismo que los pueblos originarios están recuperando, no tanto con la reivindicación de la autonomía en cuanto tal, como por su intenso activismo en la defensa territorial de los bienes comunes.<sup>31</sup>

**Territorio genético.** Además del territorio propiamente dicho, se defienden ámbitos no geográficos que metafóricamente podemos considerar territoriales. Por ejemplo, el territorio genético que erosionan empresas trasnacionales como *Monsanto* y *Syngenta*, al alterarlo a través de bioingeniería y privatizarlo mediante patentes. “Nuestros mismos esfuerzos para producir cepas de alta productividad, tienen el efecto de reducir la variabilidad de una especie”, escribió Otto Frankel.<sup>32</sup> Pero eso, que siempre es grave y mucho más cuando el cambio climático mercadogénico hace ver la creciente importancia la capacidad adaptativa de la diversidad genética, les importa un comino a las trasnacionales. El saldo de su desaprensiva codicia son semillas transgénicas que las grandes corporaciones buscan establecer comercialmente, poniendo en riesgo la diversidad de plantas como el maíz, del que México es territorio de origen.

**Hidrocarburos.** “Si se controla el petróleo se controla el país; si se controla la comida se controla la población”, dijo Henry Kissinger<sup>33</sup> y a este control se resisten muchas comunidades, entre ellas el Grupo Vicente Guerrero, de Españita, Tlaxcala, que en 2011 logró que se aprobara en una Ley de Fomento y Protección al Maíz, que dificulta la siembra de transgénicos en ese estado.<sup>34</sup> En la misma línea se mueven convergencias naciones de agrupaciones sociales, organizaciones civiles y académicos como la Campaña Sin maíz no hay País y la Red en Defensa del Maíz.

<sup>31</sup> Armando Bartra, *Los nuevos herederos de Zapata. Campesinos en movimiento 1920-2012*, México, CNPA/Circo Maya/PRD, 2012, pp. 225-236.

<sup>32</sup> Citado en Silvia Rodríguez, *El despojo de la riqueza biológica: de patrimonio de la humanidad a recurso bajo soberanía del estado*, México, Itaca, 2012, p. 48.

<sup>33</sup> *Ibidem*.

<sup>34</sup> Lourdes Roudiño, “De facto la Ley de Fomento y Protección al Maíz, de Tlaxcala, frena los transgénicos”, *La Jornada del campo*, núm. 44, *La Jornada*, 21 de mayo del 2011.



**Espectro electromagnético.** Otro territorio peleado es el del espectro electromagnético, un bien propiedad de la nación que no puede ser empleado para transmisiones sin previa autorización gubernamental, pero que los gobiernos han entregado a los poderosos empresarios dueños de radios y televisoras. Desde hace décadas, las comunidades indígenas han defendido su derecho a ocupar una parte de este espacio, estableciendo numerosas radios comunitarias, unas autorizadas y otras que operan por la libre. Entre ellas, la decana Radio Huayacocotla, en la Huasteca; Radio *Nomndaa* y La Voz de los Pueblos, de Guerrero; La Voz que Rompe el Silencio y Radio *Ikoots*, de Oaxaca; La Voz de los Sin Voz, de Chiapas; Radio *Xiranhua Kuskua*, de Michoacán, entre muchas otras.<sup>35</sup>

**Narcoterritorios.** Por si los capitales “legales” no fueran plaga suficiente, en los últimos cinco lustros también se hizo abrumadoramente presente en el campo, el capital que lucra con la prohibición y obtiene rentas de la ilegalidad. En lo que va del siglo, los cárteles de la droga irrumpieron masivamente en las comunidades rurales, a veces expulsando a la gente de sus territorios y otras obligándola a trabajar en “el negocio”. Y es que, en última instancia, el crimen organizado hace lo mismo que los capitales convencionales, sólo que utilizando de manera más intensiva las armas.

México esta enfermo de violencia, dolencia que se agravó en la última década, cuando el gobierno quiso hacer frente a los cárteles de la droga con estrategias de guerra y provocó una interminable masacre que entre 2006 y 2012 dejó más de 60 mil muertos y cerca de 300 mil desplazados. Y si a los caídos en la “guerra contra el crimen organizado” se añaden las víctimas de homicidios dolosos, la cifra aumenta a cerca de 90 mil, lo que significa que en algo más de un lustro los afectados indirectos de este tipo de violencia son del orden de 360 mil, entre ellos unas 24 mil viudas y cerca de 50 mil huérfanos.<sup>36</sup> Y esto se expresa en una cruenta batalla por los territorios.

Estudios recientes sostienen que “[...] regiones enteras de México están controladas por actores no estatales, como son las organizaciones multicriminales (que) han mutado de [...] carteles de la droga a [...] motor de sociedades y economías alternativas”.<sup>37</sup> Esto ha llevado a expertos como John P. Sullivan a sostener que México es un “Estado fracasado”, que en muchas zonas ha sido sustituido por un “estado criminal liberado” que ha establecido “soberanías paralelas”. Este mismo autor propone analogías sugerentes entre el orden creado por los cárteles de la droga y la dominación que en otros ámbitos ejercen los “señores de la guerra” y con las relaciones sociales propias del “período del feudalismo”,<sup>38</sup> un sistema cuya reproducción se sostuvo

<sup>35</sup> Sofía Medellín, “Radios comunitarias alzan la voz contra la exclusión”, *La Jornada del campo*, núm. 44, *La Jornada*, 21 de mayo del 2011.

<sup>36</sup> Leticia Ramírez de Alva, “Índice de víctimas visibles e invisibles”, citado en Gloria Leticia Díaz, *Las víctimas visibles e invisibles del sexenio*, *Proceso*, núm. 1857, 3 de junio del 2012, p. 18-20.

<sup>37</sup> Howard Campbell, citado en Marco Appel, “Ante el Estado fallido, narcoestado sustituto”, *Proceso*, núm. 1853, 6 de mayo del 2012, p. 38.

<sup>38</sup> John P. Sullivan, “De las guerras contra las drogas a la insurgencia criminal: los cárteles mexicanos, enclaves e insurgencia criminal en México y Centroamérica y sus implicaciones para la seguridad global”, citado en Carlos Fazio, “La territorialidad de la dominación IV”, *La Jornada*, 26 de mayo del 2012, p. 17.

sobre la coacción moral y material y no sobre el mercado y el Estado, aunque los hubiera.

En Michoacán el narco es soberano y entre 2012 y 2013, un solo cártel, el de los caballeros templarios, llegó a controlar la mayor parte de la entidad. Un estudio realizado por el agente federal de inteligencia Octavio Ferris, sostiene:

Los Caballeros Templarios [...] tienen una organización “espejo” de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán [...] Están divididos, igual que la Procuraduría michoacana, en siete subregiones, cada una de ellas con su jefe [...] A principios de 2013 controlaban 81 municipios, [...] los más importantes de la entidad, incluyendo (*la capital*) Morelia.<sup>39</sup>

En el estado, que da al Océano Pacífico, colinda con la Sierra Madre Occidental y tiene fronteras con Guerrero, Jalisco, Guanajuato y Estado de México, se mueve cocaína por tierra y en lanchas con doble motor fuera de borda, en la sierra se siembra mariguana y también amapola de la que se extrae goma de opio base de la morfina y la heroína, y sobre todo se produce cristal y otras drogas sintéticas en verdaderas “fábricas de enervantes” que, según la Marina Armada de México, se incrementaron hasta en 1 200%, desplazando la siembra de plantas sicotrópicas.<sup>40</sup>

Al negocio de las drogas el crimen organizado añade otras fuentes de ingresos que además les recuerdan a los pobladores quien manda en ese territorio. Los cárteles cobran derecho de piso a los comerciantes, en las zonas silvícolas se hacen pagar un porcentaje por la madera que sale y en las de agricultura de plantación donde se cosecha limón y aguacate, piden dinero por cada tonelada producida, mientras que en otros casos cobran por la cantidad de tierra que se trabaja, mil o dos mil pesos por hectárea, según el cultivo. Más que sobornos, estos pagos se han convertido en una suerte de carga fiscal extraordinaria. Así lo reconoció recientemente un productor de aguacate: “No hacemos el pago porque queramos, pero con eso ya no nos roban y dejan que vendamos nuestro producto”.<sup>41</sup>

Y es que, en la práctica, los carteles son un Estado: imperan sobre una población y un territorio determinados, disponen de fuerzas armadas disciplinadas y centralizadas, cobran impuestos y con sus “ejecuciones” pretenden hacer justicia. En algunos casos, como el de los Caballeros Templarios, se dicen portadores de una ideología libertaria y de protección al pueblo, ciertamente mentirosa pero no mucho más que el discurso de los políticos convencionales.

Que el Estado mexicano perdió el control sobre el territorio de esa entidad federativa, lo reconoció implícitamente el propio presidente de la República. En mayo de 2013, Peña Nieto lanzó una cruzada para “recuperar Michoacán” y el 25 sostuvo:

<sup>39</sup> Citado en José Gil Olmos, “Una plaza que ambicionan todos”, *Proceso*, núm. 1917, 28 de julio del 2013, pp. 15 y 16.

<sup>40</sup> *Ibidem*, p. 16.

<sup>41</sup> Antonio Román, “Michoacán en grave caos que puede propiciar un estallido social”, *La Jornada*, 15 de agosto del 2013.

“Ha habido espacios que se han dejado o que ha ganado, lamentablemente, el crimen organizado. Por eso el operativo [...] tiene el propósito, precisamente, de lograr una recuperación territorial de la zona”<sup>42</sup>

Tan convulso como Michoacán es el estado de Guerrero, un territorio desgovernado donde operan más de una docena de corporaciones armadas diferentes, cada una de las cuales dice estar ahí para mantener el orden. Están el ejército, la marina, la policía federal, los judiciales, la policía estatal, 75 policías municipales, dos o tres cárteles de la droga, un par de guerrillas y diversas autodefensas con varios miles de integrantes armados, entre las más importantes la Policía Comunitaria dependiente del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana que controla la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular. El entuerto tiene historia. Así lo describe Abel Barreda, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan:

En las siete regiones de Guerrero, la violencia delincriminal se gestó en el seno de las instituciones policíacas y militares, las cuales urdieron negocios ilícitos con el patrocinio de los caciques. Los cuerpos policiales son parte del entramado de la corrupción y en el caso de la policía ministerial fue la punta de lanza para la infiltración del *narco* en las estructuras del Estado.<sup>43</sup>

Y la gente del campo ha tenido que aprender a sobrevivir en el mundo de los cárteles. En primer lugar en la narcoeconomía: según el ex presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos —que quizá exagera pero no demasiado— en 31% de las tierras agrícolas se siembran plantas sicotrópicas y hay quienes hablan de unos 600 mil jornaleros trabajando en esos cultivos.<sup>44</sup> En el campo, los niños que llegan a los 12 o 15 años no ingresan a la adolescencia, sino a la obsolescencia: ya están en edad de trabajar pero el desfonde productivo del agro los hace inútiles. Entonces se van o de pérdida se enrolan en el *narco*, que les ofrece una vida corta pero plena, pues a los sicarios se les respeta o cuando menos se les teme. Así las cosas, en algunas regiones de Guerrero los proverbiales “hombres de maíz” se están volviendo “hombres de maíz bola”, que así se conoce en La Montaña a la planta de la amapola.

Pero así como hay inclusión económica, también hay exclusión social y más gente ha sido expulsada de su comunidad por el narco que por las todas las presas y las minas juntas.

En julio de 2013, 1 300 personas, entre ellas 217 niños, escaparon de siete comunidades de los municipios guerrerenses de San Miguel Totolapan y Arcelia, pa-

<sup>42</sup> Citado en José Gil Olmos, “Michoacán, mucha fuerza, nula estrategia”, *Proceso*, núm. 1917, 28 de julio del 2013, p. 14.

<sup>43</sup> Abel Barreda, “Guerrero bajo el cerco de las armas”, *La Jornada*, 10 de agosto del 2013, p. 15.

<sup>44</sup> Víctor Ronquillo, “La narcoagricultura, cáncer del campo mexicano”, *La Jornada del campo*, núm. 40, *La Jornada*, 15 de enero del 2011, p. 17.

ra refugiarse en el atrio de la iglesia de San Miguel en la cabecera de esta última circunscripción. Los desplazados huían de un grupo armado de 200 personas que recorría los pueblos dando tiros, tumbando puertas y quemando casas, al parecer porque algunas comunidades, antes arregladas con un cartel, habían decidido cambiar de bando. “Ahí quedaron mis plantas, mis animalitos, mis tierras; nos vinimos, no pudimos más [...]”, dice don Ismael, de 72 años y hasta el día anterior vecino de El Cubo, municipio de San Miguel Totolapan.<sup>45</sup>

También en el municipio guerrerense de Petatlán, hay desbandada por el narco, pero ahí es silenciosa, es hormiga y, por tanto, no es noticia de ocho columnas. Así lo cuenta María con una elocuencia que ninguna sociología puede superar:

Yo creo que ya no hay comunidades. Sólo hay familias arrimadas, arrinconadas, bocabajeadas y calladas. Gente que ni siquiera puede hablarse, ayudarse. Porque la violencia nos desaparte, nos quita hijos, sobrinos [...] ¿Y entonces? ¿Cómo vamos a estar unidas las familias, si ya metieron la podredumbre dentro? ¿Si ya pusieron a fuerzas el arma en manos del hijo, si ya le dieron una? Te dicen: “Nomás te callas, si llegan los encapuchados o la camioneta con los armados, baja los ojos y no digas nada, ándate derechita y a la mejor no le pasa nada a tu familia”. Entonces la gente sale porque tiene miedo de que la maten. No le hace que perdamos todo. Aunque sea nos queda la vida ¿no? [...]

En México, el Estado de derecho no impera o impera bajo la forma de su interrupción, que diría Giorgio Agamben.<sup>47</sup> Es la nuestra una sociedad donde no por excepción sino por regla, el orden se preserva o modifica mediante acciones desarrolladas al margen de la Ley por fuerzas extralegales que, sin embargo, tienen imperio de ley. Esto incluye la añeja prepotencia caciquil y el terror impuesto por los carteles del narco, pero también la arbitrariedad con que el gobierno emplea tanto, su poder burocrático como la fuerza pública y el enriquecimiento ilícito consustancial a la cleptoburguesía mexicana. Prácticas metajurídicas que con frecuencia son violentas. Y no se trata de anomia y violencia residuales, progresivamente sustituidas por el imperio de la legalidad. Al contrario, la violencia es creciente y en un asunto nodal como el narcotráfico tanto delincuentes como “autoridad” actúan al margen de la Ley, pues ni unos ni otros tratan a sus contrarios como ciudadanos con derechos sino como enemigos a exterminar. Y si los poderes formales e informales no respetan la ley, la gente —sin necesidad de haber leído a Walter Benjamín—<sup>48</sup> concluye que lo más conveniente es crear su propio estado de excepción, tomando en sus manos la protección de las familias.

<sup>45</sup> Sergio Ocampo Arista, ““Los sacó el pánico, nadie murió”: edil. La violencia no pasó a mayores, dice”, *La Jornada*, 20 de julio del 2013, pp. 2 y 3.

<sup>46</sup> Lorena Paz Paredes, “Pueblos fantasmas y comunidades baldías en la sierra”, *La Jornada del campo*, núm. 60, *La Jornada*, 15 de septiembre del 2012, p. 20.

<sup>47</sup> Giorgio Agamben, *Estado de excepción*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2003.

<sup>48</sup> Walter Benjamin, *Tesis sobre la historia y otros fragmentos*, México, Itaca/UACM, 2008, p. 43.

La proliferación en 2012 y 2013, de autodefensas comunitarias armadas, es la expresión más reciente de la autodefensa del territorio por parte de los pueblos. Pero el asunto tiene historia.

Desde 1994 en las zonas que estaban bajo control de EZLN, después en los municipios autónomos y más tarde en las amplias regiones gobernadas por las Juntas de Buen Gobierno, los neozapatistas de Chiapas atienden por su cuenta las cuestiones de seguridad y justicia de decenas de miles de personas.

Un año después, el 15 de octubre de 1995, integrada por varios pueblos de la Montaña de Guerrero, se formó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que obedece a la Asamblea Regional, y de la que depende el Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducción Comunitaria. Hoy, con más de mil 200 policías que son electos públicamente por cada comunidad, procura seguridad a alrededor de 108 pueblos, en los que se ha reducido la criminalidad hasta en un 95%.

A raíz del asesinato por el *narco* de Benjamín LeBarón y Luis Widmar Stubbs, en 2009 la comunidad mormona de Chihuahua decidió formar una autodefensa armada.

En mayo de 2011, en Tetela del Volcán, se integró el llamado Grupo Relámpago, formado por 200 personas entre las que hay campesinos, comerciantes y profesionistas que protegen una región de Morelos, Puebla, Tlaxcala y Estado de México. Ese mismo año, también en Morelos, las comunidades de Ocoaxtepec, Jumiltepec y Zacualpan formaron grupos de autodefensa. Y lo mismo sucedió en Cherán, Michoacán, donde la comunidad se armó para defenderse de los talamontes vinculados al *narco*, en el mismo estado hay experiencias semejantes entre nahuas de la costa, purépechas y mazahuas. En 2012, en la zona de Tantoyuca, Veracruz, se integró la Guardia Civil Huasteca.

A principios de enero de 2013, en la región de la Costa Chica, cuatro comunidades agrupadas en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, decidieron tomar las armas para defenderse del *narco*, en unos cuantos días detuvieron a 54 personas acusadas de delincuencia organizada y para juzgarlas decidieron constituirse en “tribunal popular”, aunque a la postre los entregaron a las autoridades del estado. Ese mismo año, en Temalacatzingo, municipio de Olinalá, se forma la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular que, como las otras autodefensas armadas de la entidad federativa, se ampara en el artículo segundo de la Constitución y en la Ley 701, de Reconocimiento de Derechos y Cultura de las Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.

En Ayotitlán, Jalisco, desde 2012 están tratando de conformar una vigilancia comunitaria, como parte de la Organización de la Policía Comunitaria de todo el estado.

Asimismo, en las comunidades indígenas donde se mantiene el sistema de cargos, los *topiles* o *polecías* sirven a su pueblo en funciones de seguridad y en algunas operan jueces indígenas.

En agosto de 2013 en dos estados distintos y casi simultáneamente, las auto-defensas armadas se pusieron al tú por tú con el ejército: en El Pericón, Guerrero, pobladores secuestraron a cien efectivos militares que pretendían desarmar a los policías comunitarios y, poco después, en Aquila, Michoacán, localidad de la que han tenido que salir alrededor de cien personas y donde la autodefensa comunitaria desarmó a la policía municipal, el ejército detuvo a 45 vigilantes e incautó 70 armas, a lo que los vecinos respondieron reteniendo a 60 soldados con el fin de negociar la liberación de sus presos.

Con base en una revisión periodística, José Gil Olmos calcula que en el país “hay más de 36 grupos de autodefensa ciudadana en ocho estados: 20 en Guerrero, cuatro en Michoacán, tres en Morelos, dos en Oaxaca, dos en Veracruz, dos en Chihuahua, dos en el Estado de México y uno en Jalisco”.<sup>49</sup>

## IV. ¿Una nueva etapa del movimiento rural mexicano?

A la postre, la reseña resultó abrumadora pero era necesario hacer patente la omnipresencia, diversidad e intensidad que en los últimos lustros han cobrado las luchas territoriales en defensa del patrimonio. Hay en el campo otros conflictos y otros movimientos, sin embargo, tengo la impresión de que los procesos locales y regionales reseñados, y muchos más que no pude incluir, conforman no una suma de acciones sueltas y dispersas, sino un gran movimiento rural en formación. Oleada de lucha que pese a su diversidad —o quizá gracias a ella— va definiendo una etapa específica y diferenciada del secular movimiento campesindio mexicano.

Me doy cuenta de que hay en lo que afirmo una paradoja. Es verdad que numerosas comunidades se alzan en defensa de su territorio amenazado por las corporaciones, pero al mismo tiempo, la abrumadora mayoría de los jóvenes rurales se aleja física o espiritualmente del campo.

En las últimas décadas se han ido definiendo algunos ejes de la lucha campesina, tales como la soberanía alimentaria, la protección del medioambiente y la que aquí me ocupa: la defensa del territorio.

Los pequeños productores organizan ferias del maíz y bancos de las semillas de por acá a las que llaman criollas, y algunos impulsan una campaña permanente por la soberanía alimentaria llamada “Sin maíz no hay país”, que ha movilizado a cientos de miles de personas. No dudo, entonces, que la soberanía alimentaria es una de las banderas unificadoras del combate rural. Pero, dónde queda esta centralidad cuando quizá cinco millones de los presuntos productores de alimentos se han marchado del campo en los últimos años, unos a las ciudades y otros a Estados Unidos, y muchos de los quedados, sólo esperan que allá acabe la recesión para escapar.

---

<sup>49</sup> José Gil Olmos, “Michoacán, mucha fuerza, nula estrategia”, *Proceso*, núm. 1917, 28 de julio del 2013, p. 14.



Es verdad que algunos agricultores familiares están revalorando las viejas prácticas de cultivo y exploran alternativas novedosas inspiradas en el ancestral paradigma de la milpa. Pero, dónde quedan la preservación del medioambiente y la agroecología como demandas generales y compartidas, cuando la competencia con productos chatarra baratos desalienta el empleo de técnicas sustentables pero caras, laboriosas y menos “eficientes”, y cuando la migración —que se lleva mano de obra y trae dólares— induce a sustituir trabajo por insumos de fábrica.

Y, como hemos visto, decenas de comunidades a lo largo y ancho del país se oponen a presas, minas, carreteras, ductos, urbanizaciones [...] Pero, dónde queda como reivindicación generalizada, la defensa del territorio, cuando de los 26 millones de hectáreas de tierras cultivables 12 millones están abandonadas, principalmente por la migración y por la poca rentabilidad. Nunca en nuestra historia las nuevas generaciones del agro se habían sentido tan alejadas de lo rural y al mismo tiempo nunca había sido tan decidida la defensa de los territorios rústicos.

La paradoja es sólo aparente, pues nada impide que quienes toman distancia del mundo de vida de sus padres, estén al mismo tiempo dispuestos a defender con todo la integridad de los ámbitos de los que fervientemente desean escapar. Lugares entrañables, quizá sin futuro pero con mucho pasado. Espacios significativos en los que se fincan identidades profundas. Todos hemos oído del cubano que se fue a Miami y, sin embargo, regresaría a la isla para defenderla con las armas si la amenazara una invasión. Y así los balseros de tierra firme, los rústicos mexicanos que se van: en las capas superficiales de la conciencia no quieren saber nada del campo, pero en las más profundas siguen apegados a los valores que vienen de atrás y a los lugares donde están sus raíces.

*Nunca en nuestra historia las nuevas generaciones del agro se habían sentido tan alejadas de lo rural y al mismo tiempo nunca había sido tan decidida la defensa de los territorios rústicos.*

No afirmo que la generalizada compulsión peregrina de los jóvenes rurales no debilite la defensa del campo de las amenazas corporativas. Tengo claro que sin un porvenir campesino por que luchar el arraigo que otorga el pasado es insuficiente. Sostengo, sí, que la condición campesina es un hueso duro de roer y que la tan anunciada descampesinación que sedujo a los “proletariastas” de hace cuarenta años y a los “neururalistas” de hace veinte, es más lenta y sinuosa de lo que parece. Me parece que los campesinos mexicanos —aun los que se van— quieren seguir siendo campesinos. Más aun, creo que deciden irse precisamente porque desean seguir siendo campesinos. Cuantimás estarán dispuestos a defender el terruño.

El movimiento campesino avanza por oleadas y en cada una los ejes de la movilización son distintos.

En los años setenta de la pasada centuria, un generalizado combate contra el latifundio y por el acceso a tierras agrícolas que puso en pie a millones de campesinos

en toda la República, muchos de los cuales ocuparon pacíficamente grandes propiedades, obligó al gobierno a repartir cientos de miles de hectáreas.

En los ochenta del mismo siglo los pequeños agricultores agrupados en organizaciones económicas impulsaron una lucha por apropiarse del proceso productivo, tomando en sus manos financiamiento, cultivo, transformación agroindustrial y comercialización, en proyectos asociativos integrales.

En los años noventa, el combate por los derechos autonómicos de los pueblos originarios activó a cientos de miles que, con el respaldo de muchos más, forzaron un acuerdo con el gobierno, a la postre minimizado por los legisladores.

En el arranque del siglo XXI cientos de miles de campesinos se movilizaron contra los aspectos agrarios del TLCAN y para tratar de imponer un viraje en las políticas públicas para el agro, en una convergencia, conocida como “El campo no aguanta más”; el movimiento logró forzar un importante Acuerdo Nacional para el Campo, que sin embargo, el gobierno no honró.

En lo que va de esta centuria, el reiterado incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos a los que había llegado, primero con los indios y luego con los campesinos, convenció a muchas organizaciones rurales de que mientras gobernara la derecha nada importante se iba a lograr, y que para salvar al campo hacía falta un cambio de régimen político. Así en 2006 una coalición de 27 organizaciones agrupadas en torno a una plataforma titulada “Un nuevo pacto nacional por un mejor futuro para el campo y la Nación”, apoyó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Seis años después, estas y otras setenta organizaciones formularon el “Plan de Ayala para el siglo XXI”, con el que AMLO también se comprometió.<sup>50</sup>

Durante los últimos 40 años los campesindios mexicanos han dado cuando menos cinco grandes batallas nacionales convocadas por diferentes reivindicaciones unificadoras. En la pasada centuria fueron la *tierra*, en los años setenta; la *producción económica*, en los años ochenta; y los *derechos autonómicos* indios, en los años noventa; y en los primeros años de este siglo fue la *reorientación del modelo agropecuario*, mientras que en las coyunturas electorales del 2006 y 2012, cobro fuerza el movimiento por el *cambio del régimen político*. En rigor, estas diversas vertientes no se suceden, más bien se traslapan. Pero, en perspectiva, el ascenso de una va acompañado por el reflujo y pérdida de visibilidad de otras.

Mi hipótesis —o mas bien mi apuesta, pues lo que suceda dependerá de lo que hagamos para hacerlo suceder— es que en los últimos años la defensa territorial de los comunes se volvió la tendencia dominante de la lucha rural y está definiendo una etapa nueva y distinta del movimiento campesino. Estas son algunas características que encuentro en esta vertiente del rústico activismo.

---

<sup>50</sup> Armando Bartra, *Los nuevos herederos de Zapata. Campesinos en movimiento 1920-2012*, CNPA, PRD, Circo Maya, 2012, pp. 268-273.

- Pese a la diversidad de los combates detrás de todos ellos subyacen factores estructurales comunes. La defensa del patrimonio familiar y comunitario responde a una gran diversidad de amenazas: minas, presas, carreteras, gran turismo, urbanizaciones, eoloeléctricas, talamontes, narcotraficantes, erosión del genoma, usurpación del espectro electromagnético, privatización de la cultura [...] Agresiones múltiples pero convergentes que, de no pararse a tiempo, estrecharán los espacios agroecológicos, económicos, sociales y culturales de la vida comunitaria al punto de hacerlos por completo inhabitables. Lo que está en riesgo es la existencia misma del mundo campesino e indígena, un *ethos* plástico y mudable, pero milenario que pese a los cambios —o gracias a ellos— ha preservado los principios básicos de una socialidad a otra, sin duda subordinada al gran dinero pero en sí misma no capitalista. La moneda está en el aire y el albur es civilizatorio.
- La defensa del territorio define una época del movimiento campesindio mexicano. La reivindicación de la tierra, la resistencia en los territorios, es ancestral y su emblema bien podría ser la raya en el suelo con que el jefe yaqui paró a los españoles hace 500 años. Desde entonces ha sido recurrente, y la combativa oposición de las comunidades campesinas e indígenas a los acaparamientos de tierras y aguas, a los talamontes y a las presas y minas que los agredían, marcó la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo en los últimos tres lustros los despojos asociados a la neoterritorialización del capital han multiplicado las resistencias. No estamos ante una simple continuidad, sino ante un salto de calidad; una etapa nueva de la lucha campesina e indígena.
- En pocos años el movimiento devino nacional. Las concesiones mineras cubren todo el país, los proyectos hidroeléctricos se multiplican y pese a algunos descalabros financieros las inmobiliarias siguen en marcha, de modo que la resistencia ha cobrado un carácter nacional. No hay estado de la República en que estén ausentes los movimientos en defensa del territorio y sus recursos.
- El movimiento está en ascenso. Lo que se juega es —literalmente— el negocio del siglo, de modo que las empresas y sus personeros en el gobierno recurren a la represión y si hace falta al asesinato, además de que numerosas comunidades están debilitadas y divididas. Aun así, la defensa de los territorios es una lucha en expansión que el tamaño del reto y la beligerancia de los enemigos no han logrado poner a la defensiva.
- Las convergencias se van imponiendo a la dispersión inicial. Siendo territorial y respondiendo a diferentes clases de amenazas, la defensa del patrimonio es de arranque una lucha dispersa en la que, sin embargo, comienzan a evidenciarse confluencias regionales y temáticas. Frentes estatales, redes nacionales como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, la Red Mexicana de Afectados por la Minería y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, y abundantes nexos internacionales, entre ellos el que tienen con El Tribunal Permanente de los Pueblos, que ha docu-

mentado 300 luchas contra afectaciones del territorio y otros bienes comunes, dan fe de las tendencias confluentes de una lucha aun parcelada pero sin duda en proceso de unificación.

- La defensa del territorio se politiza. En un país donde el Estado, que por años se presentaba como heredero de la Revolución, extendió sus atribuciones a todos los ámbitos de la producción y la reproducción, en el país de “ogro filantrópico” los movimientos sociales se politizan rápidamente, pues a las primeras de cambio se topan con el poder gubernamental. Más aún, los campesinos, que por décadas dependieron de papá gobierno para acceder a sus parcelas y a los recursos para cultivarlas. La lucha por la tierra de los años setenta tenía enfrente al latifundio pero sobre todo el presidente Echeverría, los proyectos asociativos de los años ochenta y primera mitad de los noventa se negociaban con los presidentes Salinas y De la Madrid, los derechos autonómicos de los indios se peleaban con Zedillo, la rectificación del modelo agropecuario se discutió con el presidente Fox [...] La defensa del territorio también se topa con el gobierno, que proyecta presas, carreteras y ductos, y que otorga los permisos para otros emprendimientos, sin embargo, en muchos casos, tiene como contrapartes directas y mayores a las grandes corporaciones silvícolas, mineras, turísticas, comerciales, inmobiliarias [...] y a veces el gobierno aparece como árbitro. No hay tal, la lucha es contra los capitales predadores y contra el modelo privatizante que se impulsa desde el poder, la lucha es a todas luces política y los movimientos más estructurados y participantes en redes lo tienen cada vez más claro.
- Pese a la participación de clases medias y algunos empresarios, la defensa del patrimonio es una lucha esencialmente popular. La reivindicación de territorios y recursos es transclasista y multisectorial: una lucha societal que con frecuencia moviliza a todos —o casi a todos— los miembros de una sociedad regional, un ejemplo práctico de unidad en la diversidad. Los peligros que se ciernen sobre una región y que amenazan de diferentes maneras a todos sus habitantes, generan respuestas incluyentes, pues el riesgo compartido destaca los intereses comunes de quienes viven en un mismo territorio, aun si lo hacen de manera divergente y a veces antagónica. Es sabido que los territorios son ámbitos de enconos, conflictos y rencillas entre quienes tienen intereses y pensamientos encontrados. Pero los territorios amenazados pueden ser también espacios de reconciliación y unidad, donde la pluralidad de saberes y capacidades enriquece y fortalece la convergencia en torno a los intereses de la mayoría. Y en este sentido las luchas territoriales realmente potentes son incluyentes y al mismo tiempo populares.
- Donde hay cohesión comunitaria y organizaciones preexistentes el movimiento es más fuerte. Las amenazas graves de por sí movilizan, pero más fácilmente donde los afectados disponen de previas experiencias organizativas, como las de la Ucizoni y otras que impulsan en el Istmo de Tehuantepec la resistencia a las eoloeléctricas; la Cooperativa *Tosepan Titataniske*, de la sie-

rra de Puebla, que anima la resistencia a minas e hidroeléctricas invasivas; el Frente Democrático Campesino y El Barzón que se movilizan en Chihuahua contra los pozos clandestinos y el acaparamiento de agua por los menonitas, etcétera. Y es que la defensa del territorio puede ser explosiva, pero por sí misma no genera prácticas y estructuras que le den continuidad a los movimientos. Más allá de los sabidos e inevitables flujos y reflujos de la participación popular, la permanencia de los núcleos básicos depende de que se vaya creando patrimonio organizativo y densificando el entramado social, lo que habitualmente se logra pasando de las emergencias coyunturales a la atención de problemas estructurales. Pero no todas las virtudes están del lado de los aparatos permanentes, pues es frecuente que con el paso del tiempo estos se esclerosen de modo que la gestión y, a veces, los beneficios se concentren en un grupo pequeño. Si lo hay, el remedio a este endurecimiento perverso es la irrupción de movimientos coyunturales capaces de romper las inercias y revivificar a las organizaciones.

- Más que los combates anteriores por tierra, producción, derechos autonómicos o modelo de desarrollo, el movimiento actual es campesindio. Tanto los indios como los mestizos defienden su patrimonio, pero no es la coincidencia de unos y otros en ciertas luchas lo que hace de ésta una resistencia campesindia. Y es que el concepto no remite a una mezcla de etnias, a una hibridación, sino a la coherente y unitaria identidad política de un sujeto social que al defender tanto la tierra del que la trabaja como el territorio del que lo ocupa, resiste *a la vez* la opresión de clase y la opresión de etnia, el capitalismo y el colonialismo. Al reconocerse parte de un actor social de larga duración, gran calado y presencia continental quienes asumen que al racismo y a la explotación se les resiste en una y la misma lucha, son campesindios, no importan el color de su piel ni su genealogía. Y por la naturaleza de la contradicción estructural que lo genera, el movimiento territorial de un continente colonizado y sometido al capital será campesindio o no será.
- Sin dejar de apelar a sus raíces y atender al pasado, el movimiento va mirando al futuro, va haciéndose utópico. La preservación del territorio es un combate al comienzo reactivo y defensivo. Por lo general y en su arranque, los movimientos que buscan proteger el terruño y los recursos locales responden a amenazas nuevas que introducen o actualizan contradicciones antes ausentes o solo latentes. Es por ello que al desatarse generan alineamientos sociales inéditos: convergencias de diversos que antes de la agresión marchaban separados o aun enfrentados. En esta capacidad de unir a los que estaban desunidos está su fuerza, pero para potenciarse los movimientos necesitan hacerse positivos: generar un proyecto compartido, una modesta utopía. Tal fue el caso de la forestería comunitaria que le dio perspectiva a las comunidades de la Sierra Juárez de Oaxaca que luchaban contra Fapatux; del Plan de desarrollo regional que fortaleció a los nahuas de La Montaña de Guerrero que resistían a la presa San Juan Tetelcingo; del concepto de Policía Comunitaria que per-

mitió a las comunidades de la Costa y La Montaña guerrerense recuperar los territorios perdidos por la acción de la delincuencia y las arbitrariedades de la fuerza pública; del proyecto de “Turismo con identidad” que por un tiempo cohesionó a la Cordesi en la Sierra norte de Puebla.

- No por rijoso, sino porque toca los fundamentos mismos del sistema, el movimiento es anticapitalista. Oponerse al despojo y a la depredación, es decir a la violencia expropiatoria con que el gran dinero se hace de las premisas de la acumulación, y resistir su forma destructiva de consumir esos recursos, es poner en entredicho uno de los dos pilares del sistema capitalista, el otro es la conversión de nuestra fuerza vital en mercancía y la explotación del trabajo, cuestiones canónicas que algún día recuperarán la centralidad en el combate libertario que tuvieron durante los siglos XIX y XX.
- El grado de participación popular en las luchas por el territorio depende de muchos factores, pero sobre todo del arraigo. La fuerza y profundidad de los lazos que unen a la gente con los lugares en que habita es lo que le da identidad y razones para luchar. Muchos crecen y hasta florecen en un territorio, pero no todos tienen en él raíces profundas que les permitan resistir el vendaval. Al defender un lugar y sus recursos se defienden muchas cosas: propiedades, intereses económicos, derechos [...] Pero los movimientos invencibles, los movimientos capaces de sobreponerse a los golpes y las derrotas, son los que defienden al terruño porque ahí tienen fincada su identidad. Y sin identidad nada somos. Por eso la lucha indígena por sus ámbitos ancestrales es tan potente.
- Arraigo es un concepto denso y complejo en el que podemos identificar tres dimensiones temporales complementarias: pasado, presente y futuro. Profundidad histórica, densidad organizativa y capacidad de convocatoria del proyecto, son factores que se combinan en lo que llamo *arraigo* y que es el recurso más poderoso de los movimientos territoriales. El pasado remite a las raíces mítico-culturales de un doblamiento; el presente a la intensidad, solidez y calidad de las relaciones sociales vivas, es decir, al grado y tipo de organización de la que disponen los que se movilizan; el futuro a las expectativas que tengan los participantes de poder edificar un mejor porvenir en su territorio, el futuro es la esperanza. Y sin raíces, organización y esperanza no hay mucho que hacer.
- Para defender los territorios hay que tener los pies sobre la tierra. En muchos casos se defienden los patrimonios localizados sin hacer énfasis en los espacios agrícolas. No porque la cuestión de la tierra ya pasó y ahora lo que cuenta es el territorio, sino porque a causa del hostil entorno socioeconómico y las políticas públicas desalentadoras, el proyecto campesino para el agro está desfondado. Y esto es alarmante, pues la pequeña producción familiar es el sustento más sólido de la ocupación territorial. No todos los pobladores son campesinos que cultivan, pero sin labriegos no hay territorios rurales. Ciertamente, los lugares se ocupan, se nombran, se significan, se gobiernan pero si



no se cultivan, son lugares sin alma. Un activista me informaba preocupado que en una reunión en la Sierra Norte de Puebla, donde se planeaba la defensa del territorio amenazado por hidroeléctricas y minas, alguien comentó que hacía tres años que no se paraba por su parcela, pero que ahora si la iba a cultivar para que no se la quitaran. Faltaba más.

- El lugar de los intelectuales orgánicos del movimiento lo están ocupando las organizaciones civiles. En la lucha por la tierra de los años setenta del pasado siglo y en los combates por la producción de los años ochenta, fue importante la participación de estudiantes y maestros *neonarodnikis* catapultados por el movimiento de 1968. En la insurgencia de los pueblos originarios a fines de los años ochenta y en los años noventa tuvieron un papel destacado las ONGs, muchas de ellas vinculadas a la iglesia católica, que para esos años ya proliferaban. Desde entonces, el discurso calificado de la “sociedad civil” ha sido inseparable de las resistencias. Acompañamiento en el que encuentro las virtudes de la profesionalización y las limitaciones de su tendencia a especializarse, impuesta en parte por la lógica de la “cooperación”. Y es que si hay razones para que las asociaciones civiles se enfoquen a un solo tema, no es deseable, en cambio, la excesiva compartimentación de las diferentes vertientes del movimiento: presas, minas, transgénicos, radios comunitarias [...] Los *oenegeneros* traen una sola cachucha y está bien, en cambio, la gente del común trae tantas como problemas la aquejan y la experiencia demuestra que, a la larga, es mejor ver el conjunto que atender sólo a una de sus partes.

San Andrés Totoltepec, agosto del 2013.

## Fuentes de consulta

- Agamben, Giorgio. *Estado de excepción*. Bueno Aires [Argentina], Adriana Hidalgo Editora, 2003.
- Appel, Marco. “Ante el Estado fallido, narcoestado sustituto”. *Proceso*. Núm. 1853. Revista editada en la Ciudad de México. México, 6 de mayo del 2012.
- Aquino, Salvador. “La leyenda de El Catrín. No a la extracción de oro y plata, si a la vida”. *La Jornada del campo*, núm. 67. Suplemento de *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México. México, 20 de abril del 2013.
- Barabas, Alicia M. (coord.) *Diálogos con el territorio. Simbolizaciones sobre el espacio en las culturas indígenas de México*. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2003.
- Barett, Tracy L. “Mensaje de los dioses: unirse para defender la cima del sol”. *La Jornada del Campo*, núm. 54. Suplemento de *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México. México, 17 de julio del 2012.

## Sección Doctrina

- Barreda, Abel. “Guerrero bajo el cerco de las armas”. *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México. México, 10 de agosto del 2013.
- Bartra, Armando (coord.). *Crónicas del Sur. Utopías campesinas en Guerrero*. México, ERA, 2000.
- \_\_\_\_\_. “La lucha por el bosque”. Ojarasca, núm. 47. Suplemento de *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México, marzo 2001.
- \_\_\_\_\_. *Los nuevos herederos de Zapata. Campesinos en movimiento 1920-2012*. México, CNPA/Circo Maya/PRD, 2012.
- \_\_\_\_\_ y Rosario Cobo. *La puerta del viento*. México, UCIRI, Instituto Maya, 2003.
- Benjamin, Walter. *Tesis sobre la historia y otros fragmentos*. México, Itaca/UACM, 2008.
- Boege, Eckart. “Minería: el despojo de los indígenas de sus territorios en el siglo XXI”. *La Jornada del Campo*, núm. 69. Suplemento de *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México. México, 15 de junio del 2013.
- Cariño, Carmen. “En defensa de los recursos naturales y el territorio”. *La Jornada del Campo*, núm. 44. Suplemento de *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México. México, 21 de mayo del 2011.
- CECOP, “Oposición a la Presa La Parota. Nueve años de resistencia ejemplar”, *La Jornada del Campo*, núm. 57. Suplemento de *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México. México, 23 de junio del 2012.
- Díaz, Gloria Leticia. *Las víctimas visibles e invisibles del sexenio. Proceso*. Núm. 1857. Revista editada en la Ciudad de México. México, 3 de junio del 2012.
- Enciso, Angélica. “Minera canadiense en busca de oro y plata pone en riesgo la zona de Xochicalco”. *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México. México, 6 de agosto del 2013.
- Fazio, Carlos. “La territorialidad de la dominación IV”. *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México. México, 26 de mayo del 2012.
- Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (FAO)/Rema. “Cerro de San Pedro: breve reseña de sus luchas”, *La Jornada del Campo*, núm. 67. Suplemento de *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México. México, 20 de abril del 2013.
- García, Juan. *El rechazo a la presa Las Cruces*. *La Jornada del Campo*, núm. 57. Suplemento de *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México. México, 23 de junio del 2012.
- García Arreola, Ana María. “Lucha contra la presa Paso de la Reina y por la autonomía”. *La Jornada del Campo*, núm. 57. Suplemento de *La Jornada*, 23 de junio del 2013.
- Gil Olmos, José. “Michoacán, mucha fuerza, nula estrategia”, *Proceso* núm. 1917, Revista editada en la Ciudad de México. México, 28 de julio del 2013.
- \_\_\_\_\_. “Una plaza que ambicionan todos”. *Proceso*, núm. 1917. Revista editada en la Ciudad de México. México, 28 de julio del 2013.
- González, Mauricio. “Ponerle límite a la extracción petrolera”. *La Jornada del campo*, núm. 44. Suplemento de *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México. México, 21 de mayo del 2011.

- Guadalupe Govela, Rosa Herminia y Rafael Revilla. "Proyectos de muerte en la Sierra Norte". *La Jornada del Campo*, núm. 67. Suplemento de *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México. México, 20 de abril del 2013.
- Hernández, Fortunato. *La guerra del Yaqui*. Hermosillo [Sonora, México], Gobierno del Estado de Sonora, 1985.
- Hernández, Mayolo. *Buena vida. Territorialidad y turismo en la Sierra Norte de Puebla*. Tesis de maestría en curso. Maestría en Desarrollo Rural. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
- Martínez, Sanjuana. "Pedreras tienen a Monterrey 'en la cima' de la contaminación". *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México, México, 11 de agosto del 2013.
- Martínez Elorriaga, Ernesto. "Niegan éxodo por la violencia en Aquila". *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México. México, 9 de agosto del 2013.
- \_\_\_\_\_. "En Aquila nos armamos contra el crimen organizado". *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México. México, 16 de agosto del 2013.
- Medellín, Sofía. "Radios comunitarias alzan la voz contra la exclusión". *La Jornada del campo*, núm. 44. Suplemento de *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México. México, 21 de mayo del 2011.
- Meyer, Jean. *Problemas campesinos y revueltas agrarias (1821-1910)*. México, Secretaría de Educación Pública, 1973 (SepSetentas, 80).
- Neurath, Johan. "Wirikuta y la búsqueda colectiva de visiones". *La Jornada del Campo*, núm. 55. Suplemento de *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México. México, 28 de marzo del 2012.
- Ocampo Arista, Sergio. "'Los sacó el pánico, nadie murió': edil. La violencia no pasó a mayores, dice". *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México. México, 20 de julio del 2013, pp. 2 y 3.
- Paz Paredes, Lorena. "Pueblos fantasmas y comunidades baldías en la sierra". *La Jornada del campo*, núm. 60. Suplemento de *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México. México, 15 de septiembre del 2012.
- Ramírez, Aura Helena. "Resisten los hombres del mar". *La Jornada del Campo*, núm. 44. Suplemento de *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México. México, 21 de mayo del 2011.
- Ramírez de Alva, Leticia. "Índice de víctimas visibles e invisibles". Citado en Gloria Leticia Díaz. *Las víctimas visibles e invisibles del sexenio. Proceso*. Núm. 1857. Revista editada en la Ciudad de México. México, 3 de junio del 2012.
- Robinson, Scott S. "Megaproyectos: presas, minas y demás". *La Jornada del Campo*, núm. 57. Suplemento de *La Jornada*, Diario editado en la Ciudad de México, México, 23 de junio del 2012.
- Rodríguez, Silvia. *El despojo de la riqueza biológica: de patrimonio de la humanidad a recurso bajo soberanía del estado*. México, Itaca, 2012.
- Rodríguez Walenius, Carlos. "Dominio del terreno campesino por mineras canadienses". *La Jornada del Campo*, núm. 40. Suplemento de *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México. México, 15 de enero del 2011.

- \_\_\_\_\_. “Ganancias extraordinarias de la minería en México”. *La Jornada del Campo*, núm. 67. Suplemento de *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México. México, 20 de abril del 2013.
- Román, Antonio. “Michoacán en grave caos que puede propiciar un estallido social”. *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México. México, 15 de agosto del 2013.
- Ronquillo, Víctor. “La narcoagricultura, cáncer del campo mexicano”. *La Jornada del campo*, núm. 40. Suplemento de *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México. México, 15 de enero del 2011.
- Roudiño, Lourdes. “De facto la Ley de Fomento y Protección al Maíz, de Tlaxcala, frena los transgénicos”. *La Jornada del campo*, núm. 44. Suplemento de *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México. México, 21 de mayo del 2011.
- Sáinz, Gabriela. “La hidroeléctrica El Naranjal”. *La Jornada del campo*, núm. 57. Suplemento de *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México. México, 23 de junio del 2012.
- Tapia Mallea, Luis. “Lo político y lo democrático en los movimientos sociales”. En Luis Tapia Mallea (coord.) *Democracia y teoría política en movimiento*, CIDES-UMSA, La Paz [Bolivia], 2009.
- Terrones, Mayra. “Atenco sigue en pie”. *La Jornada del campo*, núm. 44. Suplemento de *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México. México, 21 de mayo del 2011.
- \_\_\_\_\_. Proyecto de tesis de posgrado en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
- Valadez, Alfredo. “Goldcorp indemnizará con \$50 millones a ejidatarios zacatecanos”. *La Jornada*. Diario editado en la Ciudad de México, México 31 de julio del 2013.